

Debate ~~electoral~~

Proceso electoral 2007
La regulación de las
precampañas

La educación cívica como
estrategia para la
participación ciudadana
en México

Las precampañas en el
Estado de Puebla

El IEE a 8 años
de su conformación

Reforma electoral
a nivel constitucional

Género y elecciones
2004 - 2007

vota Puebla



Revista del Instituto Electoral del Estado Año 1, Núm 2 y 3, Enero - Junio 2008

Jorge Sánchez Morales

Consejero Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado

Consejeros Electorales

Fidencio Aguilar Víquez
Juan Carlos de la Hera Bada
Miguel David Jiménez López
Alicia Olga Lazcano Ponce
Paul Monterrosas Román
José Joel Paredes Olguín
José Víctor Rodríguez Serrano
Rosalba Velázquez Peñarrieta

Dirección General del IEE

Antonio Bretón Betanzos
Director General

Secretaría General del IEE

Noé Julián Corona Cabañas
Secretario General

Comité de Redacción

José Guillermo Baez Jiménez
Eduardo González Soto
Alejandro González Alderete
Marina Noriega Baez
Samuel Jorge Rodríguez Rodríguez
Javier Santiago Cruz
Salvador Sotero Jiménez Martínez
Irais Uribe Calderón

Director Revista

José Joel Paredes Olguín
Consejero Electoral

Es una publicación trimestral de distribución gratuita. ISSN en trámite, Certificado de Licitud de Título en trámite, Certificado de Licitud de Contenido en trámite, Reserva de uso exclusivo en trámite.

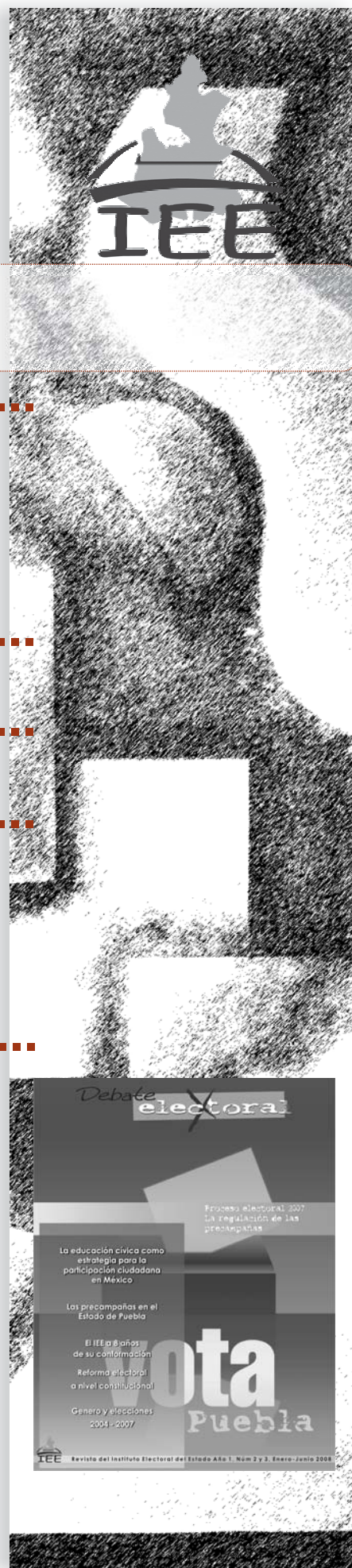
Dirección 15 pte. 3515, Col. Belisario Domínguez C.P. 72180, Puebla, Pue. Tel. (222) 303-1118 o desde cualquier parte del país al 01800 712 - 9694.

Se autoriza el uso parcial del contenido de esta revista, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético, con previo aviso y convenio con el IEE.

El contenido de cada artículo es responsabilidad de su autor.

Director de Debate electoral José Joel Paredes Olguín

Revista



Índice

Editorial	01
------------------	----

Justicia electoral	03
---------------------------	----

La regulación de las precampañas en el Estado de Puebla

Antonio Oropeza Barbosa

Reforma electoral a nivel constitucional

Gabriel González Alegría

Gobernabilidad y democracia	15
------------------------------------	----

La educación cívica como estrategia para la participación ciudadana en México

Fabiola Coutiño Osorio

Estudios electorales	21
-----------------------------	----

La coyuntura económica del Estado de Puebla y su posible incidencia en las preferencias electorales en el 2006

Marcos Gutiérrez Barrón

Jesús Pablo López

Partidos políticos y procesos electorales	37
--	----

Las precampañas en el Estado de Puebla

(Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete)

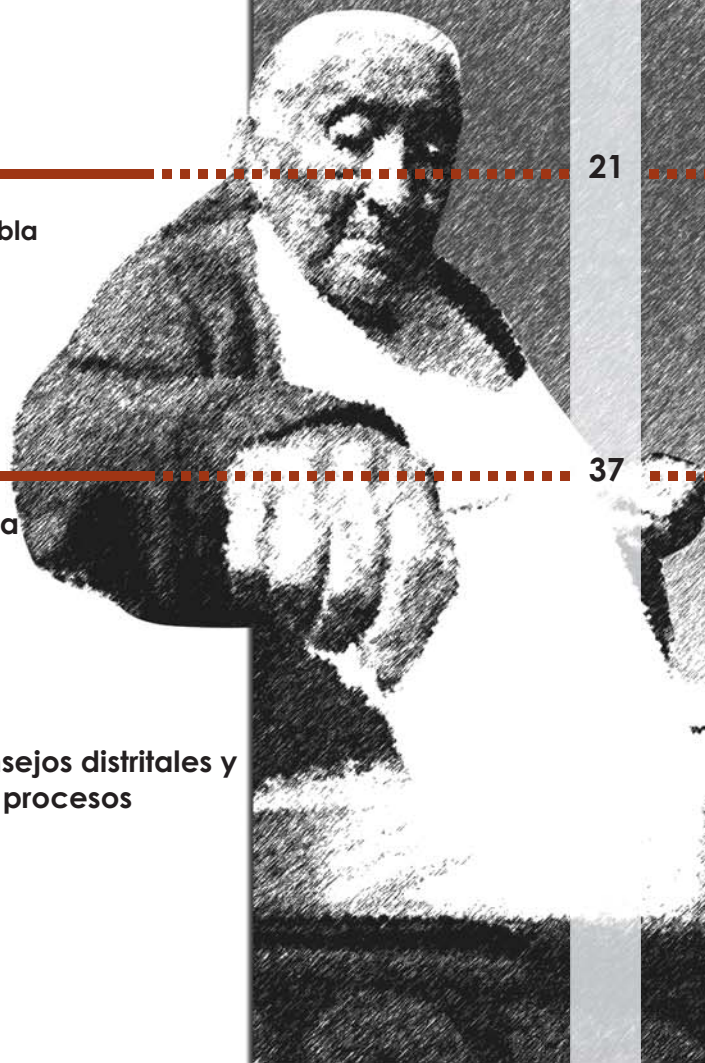
Amalia Oswelia Varela Serrano

El IEE a ocho años de su conformación

Noé Julián Corona Cabañas

Las mujeres en la integración de los consejos distritales y consejos municipales electorales en los procesos electorales ordinarios 2004 – 2007.

Marcelina Sánchez Muñoz





COMISIONES

COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Presidente: José Víctor Rodríguez Serrano
 Secretario: Fidencio Aguilar Viquez
 Miembro: Paul Monterrosas Román

COMISIÓN PERMANENTE DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

Presidente: José Joel Paredes Olguín
 Secretario: Alicia Olga Lazcano Ponce
 Miembro: José Víctor Rodríguez Serrano
 Miembro: Fidencio Aguilar Viquez

COMISIÓN PERMANENTE DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA

Presidente: Paul Monterrosas Román
 Secretario: Juan Carlos de la Hera Bada
 Miembro: Rosalba Velázquez Peñarrieta
 Miembro: José Joel Paredes Olguín

COMISIÓN PERMANENTE ADMINISTRATIVA

Presidente: Miguel David Jiménez López
 Secretario: Alicia Olga Lazcano Ponce
 Miembro: José Víctor Rodríguez Serrano

COMISIÓN PERMANENTE REVISORA DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Presidente: Rosalba Velázquez Peñarrieta
 Secretario: Paul Monterrosas Román
 Miembro: Miguel David Jiménez López
 Miembro: Alicia Olga Lazcano Ponce
 Miembro: José Víctor Rodríguez Serrano
 Miembro: Juan Carlos de la Hera Bada
 Miembro: Fidencio Aguilar Viquez

COMISIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO ELECTORAL PROFESIONAL

Presidente: Juan Carlos de la Hera Bada
 Secretario: José Joel Paredes Olguín
 Miembro: Rosalba Velázquez Peñarrieta

COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Presidente: Alicia Olga Lazcano Ponce
 Secretario: Miguel David Jiménez López
 Miembro: Fidencio Aguilar Viquez

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

Presidente: Fidencio Aguilar Viquez
 Secretario: Adriana Álvarez Hernández
 Miembro: José Joel Paredes Olguín
 Miembro: Juan Carlos de la Hera Bada

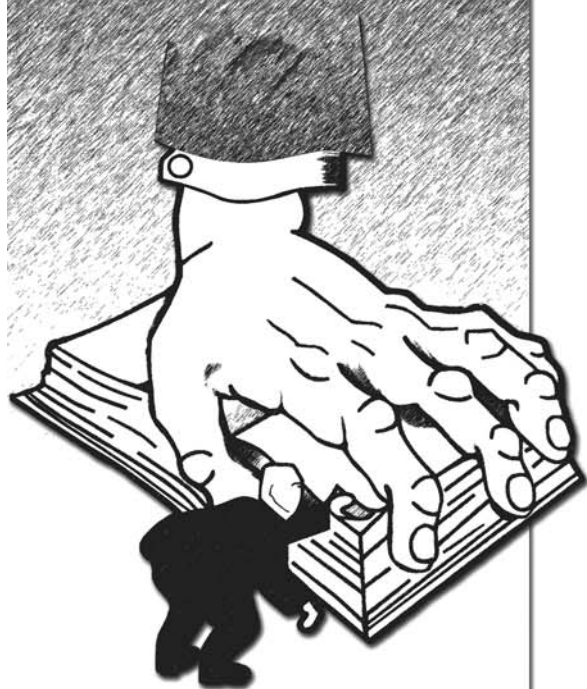
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y TRÁMITE DE DENUNCIAS

Presidente: Rosalba Velázquez Peñarrieta
 Secretario: José Joel Paredes Olguín
 Miembro: Miguel David Jiménez López
 Miembro: Paul Monterrosas Román

Debate
electoral



Editorial



En el debate actual sobre la democracia y sus instituciones ocupa un lugar relevante lo referente al marco legal en que se desarrollan los procesos electorales y aquel que norma la vida interna de los propios partidos políticos en aspectos como la selección de sus respectivos candidatos a sendos cargos de elección popular.

Es claro que discutir en torno al marco jurídico de la democracia supone un aporte fundamental a su consolidación, pues resulta inimaginable la construcción de una vida democrática en ausencia de un marco jurídico pertinente. Dicha pertinencia, sin embargo, sólo será resultado de la más amplia y (al mismo tiempo) la más democrática participación de los actores convocados (partidos políticos, institutos electorales, centros de investigación, instancias de administración e impartición de justicia, organizaciones civiles, gremios y asociaciones, entre otros).

En esa lógica, tanto en nuestro país como en el estado de Puebla asistimos por ejemplo al debate de la normatividad respecto a la duración, financiamiento y términos de las precampañas. Como una modesta contribución a esta tarea, DEBATE ELECTORAL, órgano de difusión del Instituto Electoral del Estado, incluye en esta su segunda entrega una serie de documentos inéditos elaborados por reconocidos académicos, así como por parte de relevantes funcionarios electorales.

Tal es el caso de la doctora Fabiola Coutiño, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien aborda la compleja relación entre capacitación, educación cívica y participación electoral; o el avance de investigación del maestro Marco Gutiérrez Barrón y Jesús Pablo López del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), quienes llevan a cabo un análisis de coyuntura en el que se vinculan los

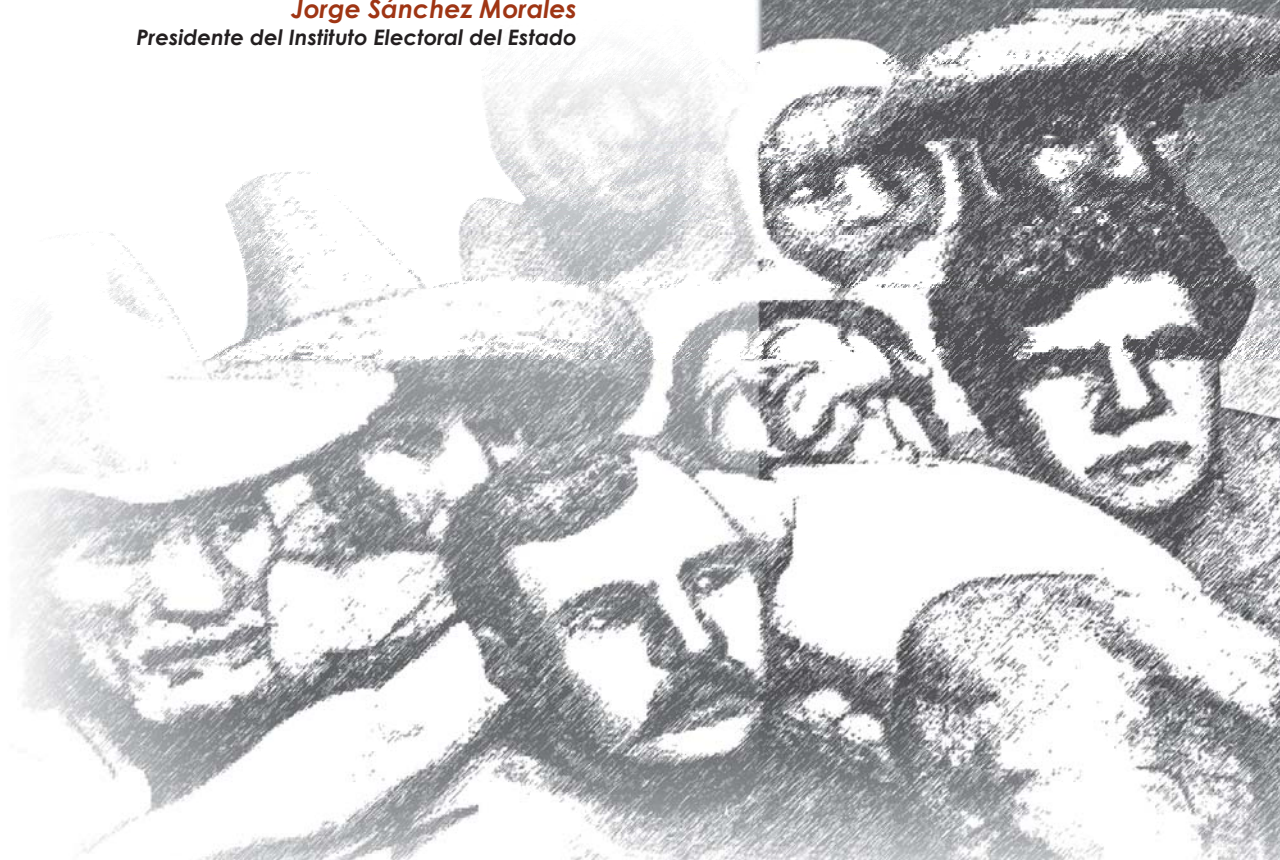
aspectos económicos y el comportamiento electoral en Puebla.

Especial mención y agradecimiento por parte de este órgano oficial de difusión merecen los trabajos de dos importantes juristas poblanos, ambos destacados integrantes del Tribunal Electoral del Estado: su presidente, el magistrado Gabriel González Alegría, y el magistrado Antonio Oropeza. Cada uno aporta en sendos artículos, un interesante análisis de las reformas constitucionales en materia electoral respecto al tema de las precampañas. El Instituto Electoral del Estado reconoce su valioso aporte

Adicionalmente, funcionarios del propio IEE, como la Directora de Prerogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, Amalia Oswelia Varela Serrano, presenta un detallado trabajo en torno a la fiscalización de los procesos de precampaña de los respectivos partidos políticos que participaron en las pasadas elecciones locales en nuestro estado.

A todos nuestros colaboradores, y a usted, atento lector, les externamos nuestro sincero agradecimiento.

Jorge Sánchez Morales
Presidente del Instituto Electoral del Estado



La regulación de las precampañas

En el Estado de Puebla

Antonio Oropeza Barbosa*

Ahora que ha concluido la jornada electoral del 11 de noviembre y que hemos visto la forma en que se desarrollaron las diferentes etapas del proceso electoral 2007-2008, en Puebla, me parece conveniente hacer una breve reflexión sobre el tema de las precampañas.

Para ello habría que iniciar comentando que por mucho tiempo los partidos políticos en México fueron considerados como entidades de naturaleza privada, como cualquier otra empresa mercantil. De ahí que se acostumbrara la intervención directa de sus dirigentes en la designación del candidato sucesor.

Pero desde el año de 1977 y hasta la fecha, nuestra Constitución Federal estableció que los partidos políticos constituyen verdaderas entidades de interés público, por lo que la sociedad moderna ha tenido, cada vez más, una gran participación en su vida interna, principalmente en lo concerniente a sus procesos internos de selección de candidatos.

Antes, los partidos políticos se interesaban principalmente por los aspectos que tenían que ver con su regulación externa, como las campañas electorales y su financiamiento público y dejaban en un segundo término los asuntos relativos a su regulación interna como serían las precampañas o sus fondos de apoyo, tal vez porque estos asuntos eran considerados desde una perspectiva de empresa privada.

Sin embargo, uno de los temas actuales de la democracia mexicana lo constituye el de la competencia intrapartidista, y en esa competencia, que se da en el seno mismo de los partidos políticos, surge el fenómeno de la promoción política anticipada, mejor conocida como precampañas.

*Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla



Los partidos políticos juegan un papel muy importante en los procesos electorales, ya que tienen, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Federal, las tres siguientes finalidades:

1.- Promover la participación del pueblo en la vida democrática (los partidos políticos estimulan a los ciudadanos para que acudan a votar en las elecciones y participen en la designación de sus gobernantes);

2.- Contribuir a la integración de la representación nacional (los partidos integran los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, las Cámaras que lo conforman y los grupos parlamentarios que debaten los temas públicos); y

3.- Hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo (Los partidos políticos postulan a los ciudadanos que habrán de contender en las elecciones para ocupar los cargos públicos, teniendo el monopolio del registro de candidatos, al no estar reconocidas las candidaturas independientes).

Para poder alcanzar esta última finalidad, los partidos políticos tienen que realizar una serie de actos que van, desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, hasta los tendientes a obtener el triunfo en la elección respectiva.

Es importante distinguir entre los actos realizados por los partidos políticos encaminados a la selección de sus candidatos, lo que se conoce como campañas primarias, campañas internas o precampañas; y los actos que tienen por objeto la obtención del voto del electorado, lo que constituyen las campañas generales, también conocidas como campañas electorales propiamente dichas.

Las campañas primarias, internas o precampañas son las que realizan los partidos políticos a fin de que los interesados, a quienes también podemos denominar precandidatos o aspirantes a candidatos, puedan llegar a ganar una candidatura por ese partido político para participar en las elecciones generales.

Podemos concebir entonces a las precampañas como el conjunto de actividades que de manera previa a la campaña electoral, son realizadas por los aspirantes a candidatos para obtener su nominación como tales, dentro de un partido político.

Esas actividades tienen por objeto mejorar la imagen de los aspirantes a candidatos



a través de, entre otras, reuniones públicas o privadas, asambleas, debates, giras, visitas domiciliarias, propaganda, eventos de proselitismo y entrevistas en los medios de comunicación.

Por su parte las campañas generales o también conocidas como campañas electorales constituyen un conjunto de acciones realizadas con el propósito de convencer o persuadir a los electores para que emitan su voto a favor del candidato que postulan. Constituyen una faceta del proceso electoral y se realizan en el periodo previo a la elección durante el cual los candidatos rivales compiten por el apoyo popular.

La principal distinción entre las precampañas y las campañas radica en la posibilidad de conciliación entre los participantes que compiten, ya que en la precampaña, una vez decidido quién representará al partido en la elección general, sus adversarios se deben de conciliar con él para apoyarlo en la campaña y favorecer con ello a que su partido consiga el triunfo en la elección general, mientras que en la campaña, no se da esta conciliación, ya que después de la elección, los adversarios pueden seguir criticando al candidato ganador, quien ahora será el representante electo por el pueblo.

Si bien es posible distinguir claramente entre campañas y precampañas, es conveniente

señalar que las precampañas no son actividades aisladas ni independientes de los procesos electorales, ya que se encuentran íntimamente relacionadas con las campañas electorales, puesto que su función estriba en identificar a las personas que se están postulando, aún no de manera oficial, dentro de un partido político, para llegar a obtener una posible candidatura, de tal suerte que el éxito de una precampaña puede trascender al resultado de la elección de un cargo público.

Esto es así porque las actividades realizadas por un precandidato no solo quedan dentro de un determinado partido político, sino que trasciende a toda la ciudadanía a través de su propaganda de precampaña, con la que da a conocer en forma general sus cualidades personales e ideología política con el fin de conseguir el apoyo de la ciudadanía y así obtener la aceptación del partido político con el objeto de que lo registre como candidato a un cargo de elección popular.

Inclusive la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 19/98 que: "Por sus objetivos esencialmente electorales, las precampañas constituyen uno de los actos de mayor trascendencia de los partidos políticos, ya que a través de estas precampañas debe buscarse a las personas que cumplan con los requisitos previstos en sus estatutos y tengan arraigo en los estratos más diversos de la población, con la intención de aumentar el

potencial electoral del partido político y de esta manera asegurar el voto ciudadano y el triunfo en la elección".

Dependiendo de la forma de su desarrollo, las precampañas se pueden dividir en dos grandes grupos: precampañas abiertas y precampañas cerradas.

En las abiertas pueden votar, para elegir al candidato interno, todos los electores que lo deseen, sean o no afiliados o militantes del partido político de que se trate. En las cerradas, los únicos que pueden votar para elegir al candidato interno, son los afiliados, militantes o delegados del propio partido político que efectúa el proceso de selección interna de sus candidatos.

La ventaja que tienen las precampañas abiertas estriba en el hecho de constituir un avance hacia la victoria en las elecciones pues con ellas se inicia la persuasión del electorado por parte del partido político y del candidato antes de la campaña general, pero tienen la desventaja de ser muy costosas, pues es necesario tomar en cuenta para la decisión, a personas ajenas a los afiliados, militantes o delegados del propio partido político.

En contrapartida, la ventaja que tienen las precampañas cerradas consiste en que son menos costosas que las precampañas abiertas ya que solo se dirigen a los afiliados, militantes o delegados del propio partido político, pero tienen la desventaja de no constituir un avance hacia la



victoria porque en estas no se consigue la persuasión anticipada del electorado.

Las precampañas no son en sí mismas un fenómeno negativo, como en ocasiones aparece en la opinión pública. Lo que sucede es que hay ciertos aspectos que tienen una influencia negativa en la concepción de las precampañas, como es el hecho de su financiamiento y la transparencia de ese financiamiento, ya que se puede correr el riesgo de que las precampañas puedan generar inequidad en la contienda electoral, posicionando anticipadamente a algunos precandidatos que cuenten con más recursos económicos.

Que la sociedad vigile a todos aquellos que aspiran a ocupar cargos de elección popular es positivo, pero que alguien se posicione por contar con más recursos que los demás es negativo, por lo que el tema del riesgo de la inequidad en la contienda electoral es preocupante en las precampañas.

Para evitar esos riesgos es necesario que las precampañas estén específicamente reguladas dentro de la ley electoral.

El regular o limitar los actos de una precampaña electoral, no es sinónimo de agravio o violación a la libertad de expresión, sino por el contrario, de tutela y protección de la misma en beneficio directo de los ciudadanos, precandidatos y partidos políticos.

El regular las precampañas tiene como principales finalidades el facilitar la promoción de las precandidaturas en forma equitativa; el propiciar que todos los participantes tengan la misma posibilidad de acceder a recursos económicos; que cuenten con los mismos topes

de gastos y estén sujetos al mismo rigor fiscalizador.

Con ello se ve fortalecida la democracia interna de los partidos políticos, al existir directrices a las que invariablemente se deben de sujetar todos aquellos interesados en participar en el procedimiento para la selección de candidatos.

El Estado de Puebla cuenta con una regulación especial respecto a la materia de precampañas, resultante del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales reformado en diciembre de 2006 y del Reglamento de Precampañas publicado en febrero de 2007 por el Instituto Electoral del Estado, en donde se establece que los partidos políticos podrán realizar precampañas para elegir a los ciudadanos que presentarán como candidatos a puestos de elección popular.

De la normatividad vigente se desprenden los siguientes temas:

1.- EL INICIO Y CONCLUSIÓN DE LAS PRECAMPAÑAS

Las precampañas se dan siempre dentro de un proceso electoral y se circunscriben a la etapa de preparación de las elecciones.

Esto es porque el proceso electoral ordinario comprende las siguientes tres etapas:

I.- Preparación de las elecciones;

II.- Jornada electoral; y

III.- Resultados y declaraciones de validez.

La primera etapa inicia la segunda semana del mes de marzo del año de la elección y concluye al inicio de la jornada electoral.

La segunda etapa inicia a las ocho horas del segundo domingo de noviembre del año de la elección y concluye con la entrega de los Paquetes Electorales a los Consejos Distritales y Municipales correspondientes.

La tercera etapa inicia con la recepción de los Paquetes Electorales por los Consejos Distritales o Municipales y concluye con los cómputos y declaraciones de validez que realicen dichos Consejos y el Consejo General, respectivamente, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie en última instancia el Tribunal Electoral.

Es dentro de la primera etapa en donde



se pueden presentar las precampañas con la finalidad principal que los ciudadanos interesados puedan realizar actividades propagandísticas y publicitarias, con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública con el propósito de establecer su postulación a un cargo de elección popular por parte de un partido político.

El periodo de las precampañas iniciará a partir de los treinta días siguientes de iniciado el proceso electoral (segunda semana de marzo) y deberán concluir necesariamente a más tardar diez días antes del inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate (última semana de agosto).

Su duración será en el plazo que fije la normatividad interna del partido político correspondiente, pero en ningún momento podrán iniciar o concluir antes de este plazo.

Los Partidos políticos que realicen precampañas, deberán dar aviso por escrito al Instituto sobre sus procesos internos, dentro de los cinco días anteriores al inicio de éstos. Ese aviso deberá indicar:

Fechas de inicio y conclusión del proceso interno de que se trate, así como copia de la convocatoria respectiva;

Los tiempos de duración y reglas de sus precampañas;

Los órganos responsables de la preparación, organización, conducción y validación del proceso interno;

El método de elección a utilizar;

El monto del financiamiento que se destinará a la organización del proceso; y

El monto autorizado para gastos de precampaña.

Los partidos políticos extenderán una constancia de registro a los aspirantes a candidatos, a fin de que sean reconocidos como tales y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al registro, deberán de informar al Instituto, los nombres de quienes contendrán como precandidatos en su proceso de selección interna de candidatos.

2.- EL FINANCIAMIENTO Y LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS

Los gastos de precampaña correrán a cargo de cada aspirante a la candidatura

respectiva.

En su primera sesión, el Consejo General dará a conocer el tope de gastos de las precampañas para la selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al veinte por ciento del monto fijado para gastos de campaña en la elección inmediata anterior del mismo nivel.

Los topes de gastos de las precampañas se determinarán por el cargo de elección popular a seleccionarse y su monto se ejercerá de manera conjunta por todos los precandidatos del partido político y/o coalición correspondiente.

Los gastos que realicen en precampaña los aspirantes, deberán ser informados al partido político y registrados contablemente, conforme a los lineamientos correspondientes en materia de fiscalización de precampañas electorales.

Las aportaciones en dinero realizadas por simpatizantes, personas físicas y morales, a las precampañas serán consideradas como parte de los límites, pero el monto total aportado durante la precampaña por una persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda, los límites establecidos.

La presentación de los informes de precampaña de cada aspirante se hará, ante el Consejo General, por conducto de cada partido político a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que concluya el proceso interno.

3.- LAS BASES PARA LOS ACTOS DE PROPAGANDA DE PRECAMPAÑAS

La colocación de propaganda de precampañas los precandidatos observarán las reglas siguientes:



Podrá colgarse en bastidores, mamparas y en elementos del equipamiento urbano, siempre que no se dañe éste o se impida la visibilidad de conductores de vehículos o la circulación de peatones;

Se colocará o fijará en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

No podrá adherirse o pintarse en elementos del equipamiento urbano;

No podrá colgarse, fijarse ni pintarse en monumentos, construcciones y zonas de valor histórico o cultural

La propaganda de precampañas deberá evitar cualquier ofensa, difamación o calumnia que denueste a la Nación, al Estado, precandidatos, partidos políticos, coaliciones, instituciones o terceros.

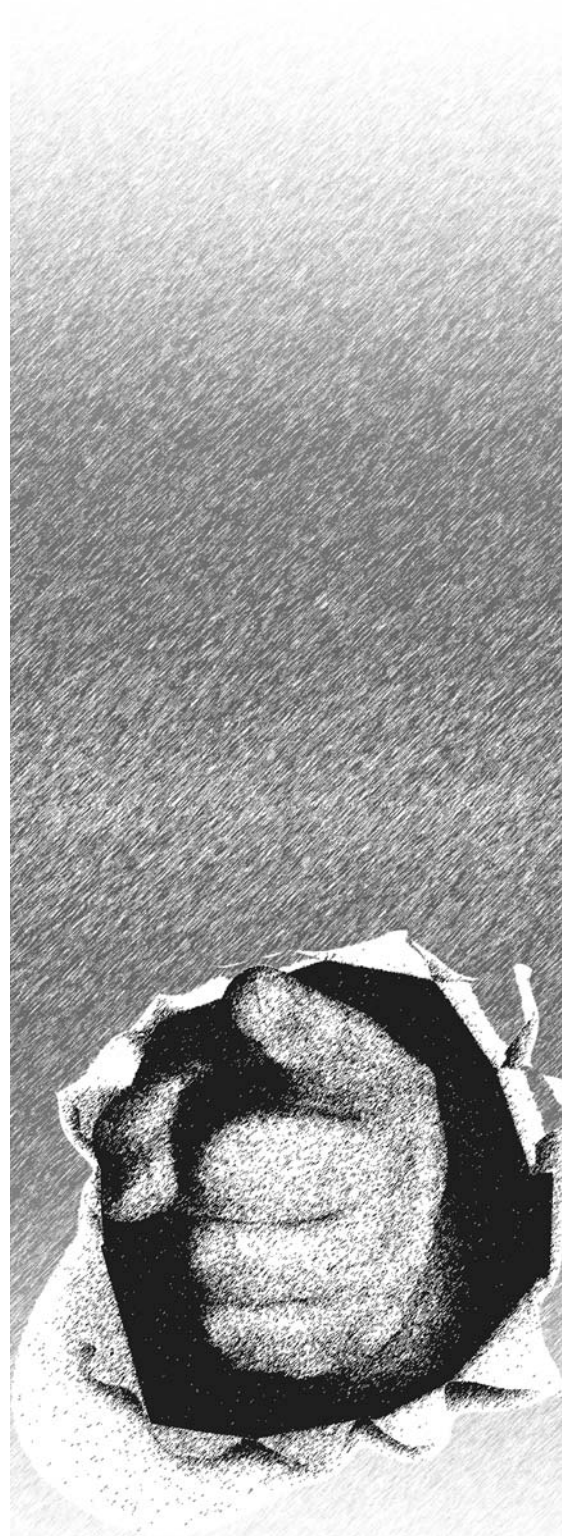
La propaganda de precampañas electorales deberá de identificar de manera clara que se trata de un proceso interno de selección de candidatos de un partido político y/o coalición, la calidad de precandidato del ciudadano, la candidatura a la que se aspira y el partido político y/o coalición por el que se realiza la precampaña correspondiente.

La propaganda que se utilizó en las precampañas electorales deberá ser retirada dentro de los treinta días siguientes a la conclusión de su proceso interno por los aspirantes a candidato y por el partido político y/o coalición al que pertenece o por el cual realizó la precampaña correspondiente.

Al día siguiente del vencimiento del plazo, el Consejo, por conducto del Consejero Presidente, remitirá oficio dirigido a las autoridades municipales para solicitar que informen detallada y gráficamente sobre el cumplimiento del retiro de la propaganda de precampañas electorales de cada partido político y/o coalición.

Una vez recibida la contestación por parte de las autoridades municipales y en caso de que éstas últimas informen que no se ha retirado la propaganda de precampañas electorales, el Consejo, por conducto del Consejero Presidente, notificará al partido político y/o coalición para que conteste lo que a su interés convenga.

Recibida la contestación del partido político y/o coalición, el Consejo, por conducto del Consejero Presidente, dará vista a las autoridades municipales de dicha contestación a



efecto de que determine lo conducente, en términos de la reglamentación aplicable.

En caso que el partido político y/o coalición no presente contestación alguna o recibida la misma no retire su propaganda de precampañas, el Consejo, a través del Consejero Presidente, solicitará a las autoridades municipales procedan a realizar el retiro de la misma, quienes informarán a su vez al Consejo detallada y gráficamente el tipo y cantidad de propaganda retirada.

El Consejo aplicará el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas correspondientes al gasto ordinario del partido político y/o coalición que no retire su propaganda, una vez que se hayan agotado los procedimientos administrativos correspondientes.

4.- LA APLICACIÓN DE SANCIONES EN CASO DE INFRACCIONES A LA LEY.

Queda prohibido a los precandidatos:

Recibir cualquiera de las aportaciones a que se refiere el artículo 49 de esta Ley;

Realizar actos de precampaña electoral fuera del plazo establecido en esta Ley y en la normatividad interna de cada partido político;

Utilizar para fines personales los recursos recabados

Hacer uso de la infraestructura pública y la realización de cualquier otro acto de precampaña

Rebasar el tope máximo de gastos de precampaña establecido;

Emplear o utilizar recursos, antes de que inicie la precampaña;

Contratar publicidad en los medios de comunicación social

Fijar su propaganda en contravención a lo establecido en el Capítulo III, Título Primero del Libro Quinto de este Código;

Utilizar en su propaganda símbolos, distintivos, emblemas o figuras con motivo religioso; y

Utilizar expresiones verbales o escrito contrarios a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás partidos políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden.

En caso de que los precandidatos cometan alguna infracción a la ley, los representantes de los partidos políticos y los ciudadanos podrán presentar ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, a más tardar cinco días antes del inicio del periodo de registro de candidatos sus denuncias por tales eventos. En ese caso, el Instituto Electoral del Estado podrá inclusive negar el derecho a registrarse como candidato cuando:

Rebasen los topes de gastos de precampaña.

Realicen actividades propagandísticas y publicitarias fuera de los plazos de precampaña correspondientes.

En caso de que los partidos políticos no se apeguen a lo dispuesto por la ley, como el hecho de que existan irregularidades en los informes de gastos de precampaña, la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado se remitirá al Tribunal Electoral del Estado para determinar las sanciones que procedan.

A manera de corolario, cabe señalar que las precampañas en Puebla tienen un aspecto muy positivo, al constituirse en una manifestación de apertura, de pluralidad, de mayor competitividad y de desarrollo democrático en el seno de los partidos políticos.

No puede haber democracia interna en los partidos políticos si no hay precampañas. Estas precampañas permiten que los aspirantes a candidaturas se sometan al escrutinio de la sociedad. Constituyen un instrumento para que la gente sepa quienes son las personas que aspiran a ocupar cargos futuros de elección popular y cuales son sus cualidades, más sin embargo estas precampañas deben sujetarse invariablemente a las reglas establecidas por el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, garantizando con ello la equidad en la contienda electoral.



Reforma electoral a nivel constitucional

Gabriel González Alegría*

En nuestro país la construcción de la democracia debe entenderse como una actividad permanente cuya responsabilidad recae en las instituciones públicas, en los partidos políticos y sus líderes, en los estudiosos de la ciencia política y en el ciudadano común. Por muchos años, no hemos logrado entender que la vida democrática es consecuencia de la convicción de todos los ciudadanos para comportarnos con respeto frente a las opiniones de otros y con valentía para expresar las propias, pues es deber de todos el observar el desarrollo de las instituciones públicas y su buen funcionamiento.

En la historia de la civilización encontramos múltiples ejemplos que llevan al fracaso. Hoy se entiende que la transformación radica en un proceso complejo, continuo y a veces prolongado, que parte de reconocer las deficiencias en las relaciones sociales para construir ideas, las cuales por sí solas son insuficientes pues requieren de acciones concretas, que puestas en práctica, nos indiquen si hemos encontrado solución total o por lo menos parcial a las diferentes situaciones de contradicción.

Es en este contexto que debemos aceptar el valor positivo de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 6 de noviembre del año 2007. Múltiples expresiones nos invitan a reflexionar sobre la trascendencia de las modificaciones constitucionales y, ante la posibilidad de criticarlas, prefiero aprovechar la oportunidad que se me brinda para considerarlas como un importante esfuerzo para modernizar las relaciones políticas derivadas de los procesos electorales, dotándolas de certeza, legalidad y equidad, sin

*Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla



olvidar la necesidad de fortalecer la participación política de los ciudadanos de manera consistente y ordenada dentro de los institutos políticos existentes o de los que en el futuro puedan crearse con un genuino y notorio apoyo social.

Desde la noción crítica se expresó, sin razón suficiente a mi parecer, que la reforma constitucional en la materia electoral se construyó desde las cúpulas partidistas y se olvidó el interés de los ciudadanos y de agentes importantes como los medios de comunicación. Lo anterior debe entenderse como una reflexión respetable pero de ningún modo como una situación que tenga origen en intereses inconfesables, en descuido o con una pretensión excluyente, por el contrario, es de mi opinión que la historia reciente del país, específicamente la experiencia electoral del año 2006, puso de relieve una serie de situaciones que fueron entendidas desde muy diversas y contradictorias formas de ver.

Los actores políticos en este proceso importante, en el que por primera vez tres candidatos de institutos políticos nacionales, contaron con un número significativo de votos que mostró, entre otras cosas, la pluralidad que se viene construyendo en las preferencias electorales, es obvio, en consecuencia, que ante un escenario de alta competencia y sobre

todo en resultados cerrados, se produzca, entre otros efectos, la percepción de que las reglas del juego contenidas en la Constitución y en las leyes electorales fueron uno de los factores definitorios del resultado de esa contienda, llegando incluso a la inexacta afirmación de que la inequidad fue consecuencia de la deficiencia o la insuficiencia de las normas jurídicas, las cuales en un momento dado, limitaron el papel de las instituciones públicas electorales para permitir un proceso político electoral injusto y que a su dicho resultó cuestionable.

Estos antecedentes inmediatos nos permiten construir la noción de que los partidos políticos al impulsar y aprobar las reformas constitucionales en la materia electoral, lo hicieron para atender una petición que resulta razonable para perfeccionar o cuanto menos, mejorar nuestro sistema político electoral. De esta premisa parto para afirmar que existió en todo momento una buena intención en la modificación a la Constitución y lo más importante radica en aceptar esta posición para generar el espacio de entendimiento necesario para consolidar nuestra aún joven democracia.

Es por ello, que en la reforma electoral fueron modificados artículos constitucionales directamente vinculados a la materia como son



el 41, 99, 116 y 122, llamando poderosamente la atención que con el carácter de reforma electoral fueran también modificados artículos como el 6, 85, 108 y 134 constitucional. En una aproximación más cuidadosa, observamos que el artículo 6 es relativo a la libertad de expresión y al derecho que tiene todo ciudadano para recibir y allegarse a la información, agregándole el derecho de replica como una garantía constitucional, teniendo esto su explicación en la circunstancia de que la libertad de pensamiento y de expresión no es absoluta, pues tiene el límite de respetar los derechos de tercero y a la moral social.

Sin embargo, bajo la pasión que mueve las contiendas electorales, es común que se afirmen de manera temeraria cuestiones que siendo verdaderas son difamatorias y en muchos casos verdades deformadas o francamente mentiras, sin que el afectado contara con un mecanismo efectivo para la defensa de sus derechos a través de la réplica sobre todo cuando el mensaje difamatorio se realice a través de los medios de comunicación.

Sobre este tema es indispensable abundar en el sentido de que muchos prefieren la libertad total aunque esta sea causa de injusticias y atropellos a lo que la propia Constitución dice inquisición judicial o administrativa. El tema es complicado y no resulta sencillo encontrar el sitio conveniente para estimar si una expresión es verdadera o pretende descalificar, deshonorar o injuriar a otra persona, sobre todo, en el calor de las batallas electorales.

Siempre que se pretende reglamentar la libertad de pensamiento y de expresión se habla de la moderación, de la autocensura que toda persona responsable debe ejercer, pero en estos casos no se requiere ni siquiera de ley pues los actos correctos nunca serán causa de conflicto, el problema se presenta cuando

cualquier ciudadano en el empleo de sus libertades va más allá de lo que las reglas legales, éticas y políticas permiten.

La reflexión final sobre este aspecto nos indicará entonces que algo sucede en el ámbito social y político electoral que requiere dotar de una nueva garantía constitucional a los ciudadanos, candidatos y partidos políticos, a fin de que puedan hacer valer en todo momento y ante todo ente social su derecho a la réplica, situación que deberá ser considerada por todos aquellos que tenemos la oportunidad de expresarnos públicamente y, sobre todo, ante los medios masivos de comunicación.

A cualquier afirmación que se considere afecta los derechos de tercero, recae de manera automática e inmediata el derecho de contestar con la misma vehemencia, intensidad, periodicidad y espacio con el que fue vulnerado el derecho de dicho tercero, cuestión que deberán tomar en cuenta tanto autoridades como los dueños de los medios masivos, puesto que ante la vulneración de la garantía constitucional, la ley dotará al tercero de procedimientos para hacer valer sus derechos además de los daños y perjuicios que todo esto pudiera provocarle.

Cuestiones fundamentales se aprecian en el artículo 41 constitucional, que implican un proceso amplio de modificación en las reglas que regulan la vida de los partidos políticos y su actividad, siendo conveniente destacar, entre otras cosas, la prohibición expresa a la intervención de organizaciones gremiales o de objeto social diferente en la vida de los partidos políticos y de igual modo, se prohíbe de manera expresa la afiliación corporativa, teniendo estas expresiones, evidentemente, una razón histórica que fue considerada por los mismos partidos políticos como un elemento de ruptura con la equidad participativa.

Las autoridades electorales se encuentran acotadas por mandato constitucional para intervenir en los asuntos internos de los partidos y esto también es derivado de experiencias recientes, en las que algunos líderes políticos han manifestado preocupación por la ingerencia que la autoridad administrativa o jurisdiccional electoral pueda producir a través del control de los recursos públicos y de las decisiones ante conflictos.

Lo anterior no puede ser considerado tampoco como una cuestión absoluta, pues es



indispensable que los partidos políticos como entidades de interés público, por la actividad política que desarrollan, por el manejo de recursos públicos y porque todos ellos, deben pugnar por el mejoramiento del país, desde su perspectiva ideológica, resulta indispensable que asuman su vocación democrática y sean los primeros que organicen su vida interna respetando los derechos de la militancia, sus estatutos y sus compromisos políticos, pues su actividad y su naturaleza les obligan a actuar con mayor transparencia que otras entidades públicas o privadas.

El control de los recursos públicos dotados, como el financiamiento, garantizan la actividad profesional y permanente de los partidos políticos en el debate de los grandes problemas de la vida nacional y es fundamental el mantener por encima el recurso público sobre el de origen privado, dado que este último es productor de grandes distorsiones en el análisis de los problemas y en el ejercicio del poder público puesto que el funcionario que llega al poder con vínculos económicos privados, es posible que actúe en favor de esos intereses y no de la sociedad. En consecuencia, siendo elevado el costo de la actividad política, también es verdad que en la sociedad contemporánea es inadmisibles un sistema político que se base en dictaduras o en tiranías.

La reducción de los tiempos de campaña nos permitirá, en un momento dado, reducir el desgaste social producido por el debate contradictorio que en algunos casos no sólo es de esta manera sino también disolutivo. Por lo tanto, es necesario que los partidos argumenten racionalmente dentro de las instituciones públicas de las que nos hemos dotado los mexicanos para organizarnos socialmente y presentarnos como un estado cohesionado y coherente en el concierto internacional.

Las recientes campañas políticas han ido más allá del debate razonable y se han transformado en verdaderas contiendas que pueden desbordarse si la pasión ciega el entendimiento. De ahí que, debemos los mexicanos exigir permanentemente debates abiertos, de altura intelectual y ética, pues de lo contrario, el escándalo puede convertirse en la herramienta única no para llamar la atención sino para adquirir popularidad y con ello, accesos al poder público por personajes que pueden ser aptos en la vida escandalosa pero ineptos en el ejercicio de las funciones públicas.



El control de la administración del tiempo en radio y televisión destinado a los fines del Instituto Federal Electoral y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, es también una consecuencia de la noción que privó como resultado del proceso electoral pasado, en donde se afirmó que hubo sesgo en comunicadores, medios, dueños de medios y en otros actores como el empresariado, quienes sin tener como objetivo la participación en las elecciones, como lo es el de los partidos políticos, tuvieron ingerencia directa a través, específicamente, de programas de opinión en radio y televisión y además, por el manejo de "spots", que incluso fueron pagados por sociedades mercantiles, cuestiones que llevaron a la medida extrema de controlar los tiempos a través de las instituciones del Estado y prohibir de manera expresa el pago de propaganda política a través de dichos medios.

Esta es una decisión que sigue causando reflexiones en ambos sentidos, pues es normal que una cuestión de tal naturaleza genere perspectivas tan disímiles, pero hay que reconocer, en primer término, que la condición histórica produjo esta serie de ideas que han sido incorporadas a la Constitución como una medida extrema para dotar de certeza y equidad a las elecciones que se deben desarrollar en el futuro y si bien es una medida difícil de defender, pues se asegura que limita la libertad de expresión, también es verdad que no es algo desconocido en el mundo electoral, pues muchas naciones, incluso desarrolladas, tienen control estatal sobre la propaganda política y, por ello, habrá

que aceptar que en este momento es una realidad constitucional y legal que no podrá ser modificada en breve plazo.

El sello de la reforma se vincula directamente con la confianza y es por ello que se plantea la renovación periódica de los consejeros electorales, sin olvidar que los magistrados fueron nombrados, seis de ellos, el año 2006, de donde se aprecia que la elección de ese mismo año produjo un desgaste mayor al de la capacidad de resistencia institucional y por eso, pareciera que una condición política necesaria, fue la reforma constitucional, el nuevo código electoral y la sustitución de consejeros electorales.

En el artículo 99 se reitera el carácter de Tribunal Constitucional Electoral de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo que termina una antigua contradicción que el pleno de la Suprema Corte creó al impedirle a la Sala Superior y Regionales emitir decisiones de constitucionalidad o interpretaciones conforme a la Constitución, argumentando que eso era facultad exclusiva de la Suprema Corte.

De cualquier manera, se le concede al Tribunal una facultad que resulta necesaria para juzgar la constitucionalidad de leyes, estatutos y decisiones y no solo de estas últimas, con la condición de que se haga en el análisis de las impugnaciones, pues la Suprema Corte mantuvo su facultad en el conocimiento de las controversias constitucionales que otorga la fracción II del artículo 105 constitucional.



Un aspecto fundamental es que las Salas Superior y Regionales así como los Tribunales Electorales Estatales, solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales expresamente establecidas en la ley, de manera que la causal abstracta construida desde la teoría y apoyada en una jurisprudencia, a quedado ya sin efecto jurídico alguno y así se ha pronunciado la Sala Superior en los últimos recursos de inconformidad en los que los partidos políticos de manera expresa o implícita, invoquen la causal abstracta referida y en consecuencia, el catálogo de las anulaciones debe estar expresa y claramente contenido en las leyes electorales.

La razón de esta reforma no puede ser otra que la inseguridad jurídica que produce para los partidos, el que por apreciaciones subjetivas o derivadas de meras presunciones, se declare la nulidad de una elección, pues todos los que trabajamos la materia electoral comprendemos que las causas genérica y concretas de anulación deben estar plenamente demostradas, ante lo cual, el constituyente permanente consideró necesario acotar, en búsqueda de certeza, las facultades que podían estimarse amplísimas o discrecionales en una causal abstracta de anulación.

Finalmente, el artículo 134 nos indica que los servidores públicos de todos los niveles, y aquí debemos incluir a los que laboran en órganos autónomos como universidades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el propio Instituto Federal Electoral, tienen prohibido el uso de recursos públicos tendentes a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, llevando incluso la prohibición de manejar propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que tenga como objeto incluir nombres, imágenes, voces, o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o afecte la actividad de los partidos políticos.

Y esta última modificación constitucional nos confirma la tesis de que todas las adecuaciones institucionales son consecuencia de la experiencia reciente que generó sospechas y reclamos de lo que ya desde 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo había expresado en el sentido de la elección legal pero no legítima, cuestión que sigue, desgraciadamente, en la reflexión colectiva y que la reforma electoral pretende eliminar. Por ello, dado lo importante de la intención que subyace en la reforma constitucional todos debemos trabajar para que opere de manera eficiente.

La educación cívica como estrategia para la participación ciudadana en México

Fabiola Coutiño Osorio*

RESUMEN: la esencia de este ensayo es plantear los problemas que giran en torno a la participación ciudadana, cuestión relacionada con la educación cívica, que a su vez, resulta ser un importante factor de impulso de la responsabilidad ciudadana, seriamente descuidada en nuestro país; es decir, mientras, por un lado se promueve arduamente la participación electoral en tiempos conyunturales, por otro, se denigra la participación ciudadana, siendo que la primera debería ser parte de la última, lo cual no es casual, pues ciertamente las instituciones públicas y privadas están más interesadas en que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos que sus derechos civiles; así mientras la participación electoral, y en consecuencia, el ejercicio del sufragio es alabado, la participación ciudadana es condenada, porque a fin de cuentas la legitimidad se ha convertido en un fin.

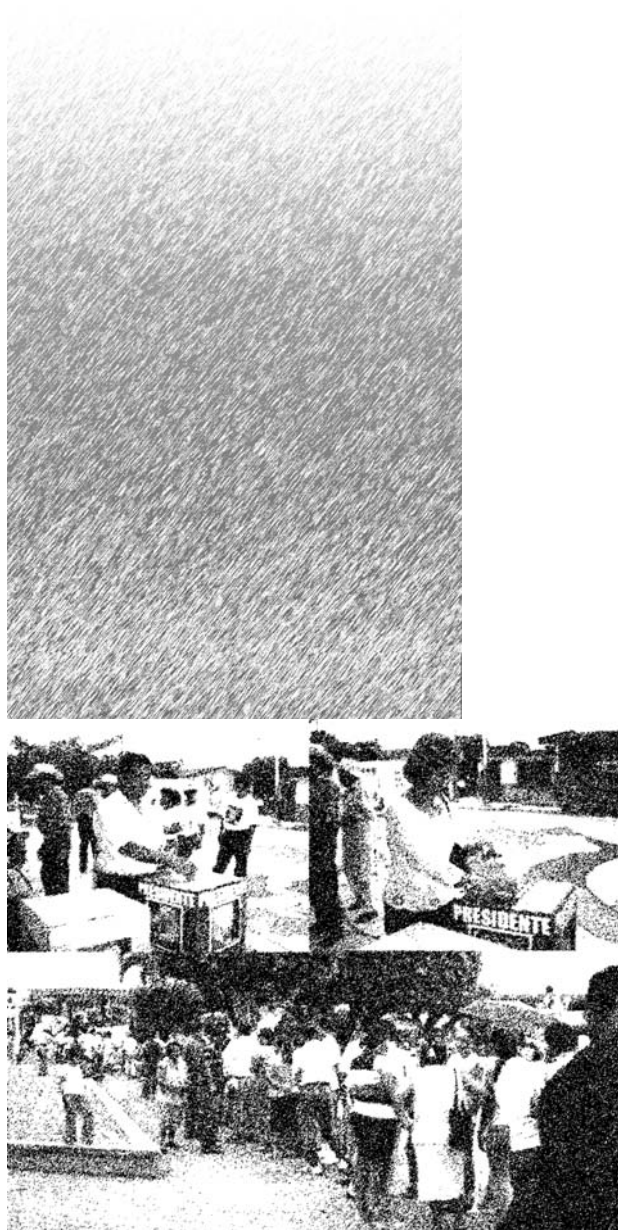
INTRODUCCIÓN

Educación cívica y participación ciudadana son temas anclados a la Cultura Política¹, a su vez, la participación ciudadana no electoral² es uno de los elementos que legitima la vida democrática, desafortunadamente se le ha restado importancia, y a su vez, esta importancia la ha ganado el voto, reduciendo las posibilidades que podrían enriquecer la relación ciudadano-Estado, sobre todo respecto a la toma de decisiones.

Así, aunque sin duda, es importante reconocer el papel de las instituciones electorales que se han destacado como agentes en la renovación del poder político, no obstante, a pesar de ello, también es palpable la crisis de confianza y credibilidad que se refleja en la falta de participación, en general, y en los altos niveles de abstencionismo, lo cual implica que entonces, el desarrollo institucional electoral no ha tenido notable influencia en el incremento de la participación ciudadana, ni electoral.

En ese sentido, la participación ciudadana puede entenderse como el conjunto

*Dra. en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es catedrática de la Facultad de Derecho de la BUAP en la Licenciatura en Ciencias Políticas y en las Maestrías de Derecho y de Ciencias Políticas, actualmente trabaja las líneas de investigación Crítica de la Modernidad y Cultura Política.



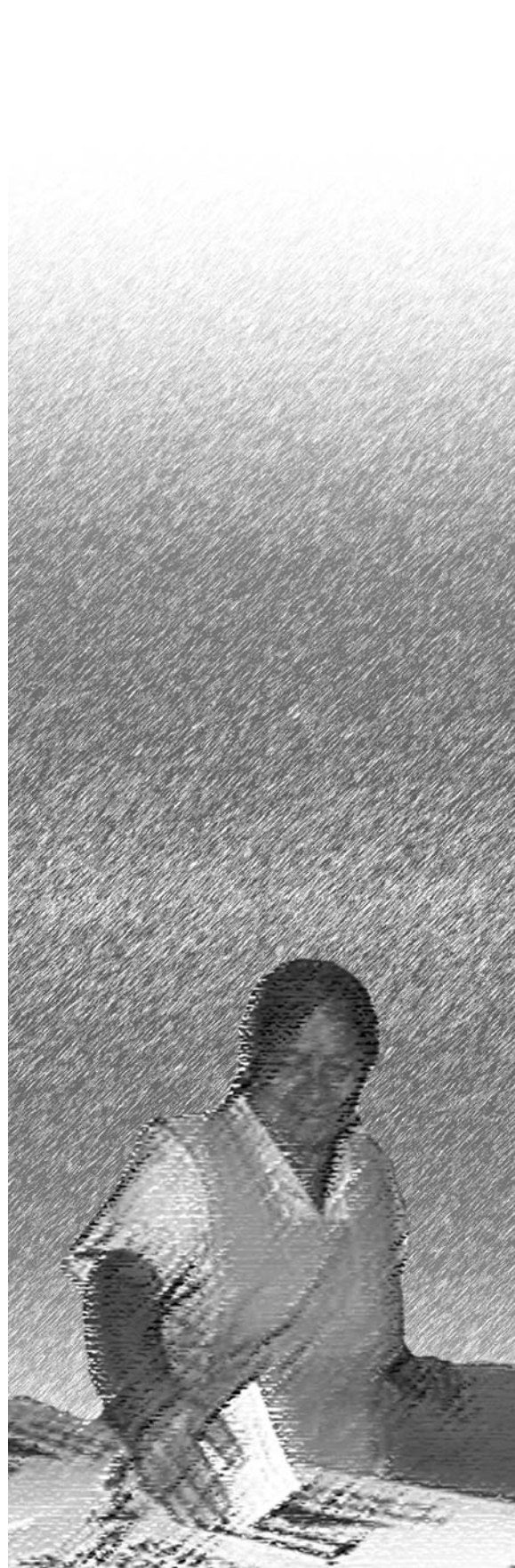
de actividades que realiza el ciudadano para influir en la toma de decisiones de las instituciones gubernamentales y en la orientación de los recursos que administra el Estado. Sin embargo, en este caso, el ciudadano común no puede ejercer influencia en la toma de decisiones, lo cual refleja el control autoritario que todavía victimiza a la ciudadanía y que lo limita para participar. Contrariamente a lo que muchos piensan, aunque hemos avanzado en el fortalecimiento de la democracia electoral a través de la creación de instituciones profesionales en sus funciones y la modernización de nuestras leyes electorales, la participación ciudadana, desde el enfoque de la burocracia, sigue siendo un punto negro que no merece atención, y aunque es clara la relación que guarda la participación ciudadana con la democracia, la postura institucional es distinta, pues, sin duda, uno de los objetivos de cualquier régimen es garantizar la gobernabilidad³, en aras de lograr la paz social y el orden en la ciudadanía, así, con el pretexto de conservar la gobernabilidad, se difunde otra lectura de la participación, se sataniza, se condena, se bloquea procurando hacerlo de la manera más discreta posible para tener una buena presentación ante la opinión pública, pues la legitimidad es un fin para los actores del poder público y el cuestionamiento de diversos grupos sociales podría afectar el consenso.

BREVE RESEÑA DE LA EDUCACIÓN CÍVICA EN MÉXICO

En nuestro país la educación cívica es un concepto que sólo forma parte del discurso, pues no es ni ha sido materia de las políticas públicas mexicanas, de ahí la ausencia de un modelo concreto relativo a la temática, que únicamente se entiende, en el mejor de los casos, como un endeble conocimiento teórico de algunos derechos plasmados en la Constitución y respecto a la relación sociedad-individuo.

La debilidad de la educación cívica en México no es algo fortuito, en primer lugar porque empieza a formar parte del discurso hasta los años ochenta, y adquiere mayor fuerza en la siguiente década⁴. Así, actualmente un sistema político democrático no se entiende sin una educación cívica consolidada que tiene su reflejo en altos niveles de participación.

Por lo que respecta al siglo XIX, la preocupación por el tema se relaciona con el momento en que se discutía la formación del nuevo Estado y en donde se plasmaba la necesidad de plantear un proyecto educativo acorde a las necesidades sociales.



En ese sentido, diversos actores políticos influyeron en las condiciones del desarrollo cultural, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán en el Artículo 39 expresaba que la instrucción era necesaria a todos los ciudadanos y además debía ser favorecida por la sociedad con todo su poder; de igual forma, la Constitución de 1824, planteaba en el Artículo 50, como una de las facultades exclusivas del Congreso General, la de promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados, de tal forma, el texto refleja la idea de conservar el equilibrio constitucional al momento de planearse la educación en México.

Pero sin duda, la posición tomada por la Constitución centralista de 1836 o Constitución de las Siete Leyes, respecto a la educación, es bastante ilustrativa, porque restringía sobremanera el ejercicio de los derechos ciudadanos al señalar en el Artículo 10 que éstos se suspenderían, entre otras causas, por no saber leer ni escribir desde 1846 en adelante, lo cual, era uno de los motivos de la pérdida total de la cualidad de mexicano. Este precepto da cuenta de la importancia que adquirió el tema de la instrucción pública para el conservadurismo mexicano y su interés por la modernidad.



Desde luego, también fue un tópico contemplado en la Constitución de 1857, así el Artículo 3 señalaba que la enseñanza era libre, además de plantear aquellas profesiones que requerían la posesión de un título para su ejercicio.

Con este escenario llegamos al siglo XX, plasmando en un nuevo pacto una serie de derechos sociales entre los que destaca precisamente el tema que nos ocupa, así el Artículo 3 señala: la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Además se hace referencia a que será democrática, nacional, tendiendo al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, contribuyendo a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, sectas, de grupos, de sexos o de individuos.

De tal forma, es claro que el Estado ha plasmado constitucionalmente la obligación de formar cívicamente a los individuos para garantizar una adecuada convivencia social sustentada en la convicción del interés general de la sociedad, lo cual contrasta con nuestra realidad educativa, pues correspondería no sólo a la Secretaría de Educación Públicas la implementación de programas orientados a cumplir con tal fin, sino a todas las instituciones públicas⁵, en general, lo cual no ocurre en este país.

Desafortunadamente a lo largo del siglo pasado y hasta el presente, el tema de la educación cívica ha perdido su sentido: hoy la formación cívica se ha dejado al margen, pues el Estado privilegia cuestiones como las relaciones internacionales y el desarrollo económico. La historia es ilustrativa, si bien, el tema fue materia de preocupación en el decimonónico, aunque no logró consolidarse un proyecto de educación cívica que influyera en la formación de una ciudadanía fuerte y crítica, esto en parte se explica por los enfoques contradictorios que los actores políticos tenían en relación a la materia: simplemente los proyectos liberal y conservador



eran antagónicos.

De cualquier forma, en la actualidad, la cátedra de educación cívica no está presente en planes de estudio de la formación básica, media básica y superior, a pesar de reconocerse su importancia, pues como se ha mencionado líneas arriba sólo se enseñan algunos aspectos constitucionales, en el mejor de los casos⁶; no obstante eso no justifica la falta de interés por parte del Estado para cumplir con la formación cívica de la sociedad, pues pareciera que, mientras se trate de elecciones, sí importa educar al ciudadano para que emita su voto, sea razonado o no, pero qué pasa con los millones de personas que no forman parte del padrón electoral: tienen un nivel de importancia distinto para el Estado al no representar algo significativo para la legitimación del poder.

EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La educación cívica ha sido entendida de diversas formas, pero invariablemente como una parte de la educación que siempre fue tema de interés desde la antigüedad, por ejemplo, para los presocráticos:

“La naturaleza y la educación son parientes: porque la educación configura según nuevas medidas al hombre y en virtud de tal cambio de medidas hace naturaleza(...) Hay que considerar como deber supremo y superior a los demás el de hacer que la Ciudad se gobierne bien y bellamente; y no hay que ser amigo de oponerse a lo equitativo ni de emplear la fuerza a favor de sí y en contra de la conveniencia general. Que una ciudad bien gobernada es el mejor de los órdenes(...)”⁷.

En ese sentido, la postura de Demócrito coloca al ciudadano⁸ en una clara relación con

el Estado, al plantear la necesidad de un buen gobierno sustentada en la conveniencia general. Hoy entendemos que la calidad de ciudadano otorga al individuo común la oportunidad de participar de los asuntos públicos, de ejercer realmente sus derechos políticos mediante una forma activa y dar sentido a su existencia dentro del Estado, con la posibilidad de hacer cambios al Estado mismo cuando las políticas que éste entraña no le favorecen:

“El ciudadano tiene, en lo sucesivo, necesidad de participar más directamente en el gobierno de la ciudad: le conciernen mucho más profundamente los asuntos debatidos; y la posibilidad de resistencia que se reservaba, va camino de reducirse a la simple recriminación. Tiene tanta mayor necesidad de participar, cuanto más se irrita por la ineficacia del sistema en que vive; y exige respuestas que sólo son posibles si tiene participación”⁹.

Lo cual implica una conciencia vital del ejercicio de los derechos que se explica no sólo por su conocimiento, sino por su práctica. Por eso no es casual que los clásicos consideraran a la participación en las cuestiones públicas como verdadera virtud, como el caso de Cicerón cuando reflexiona sobre las obligaciones:

“Mas llegando a términos de comparar cuáles obligaciones nos deben merecer más atención, las primeras son las de la patria y de nuestros padres, a quienes estamos obligados con especiales beneficios; luego las de los hijos y de toda la casa que fija únicamente en nosotros sus esperanzas (...) después las de los parientes bien avenidos, con quienes por lo regular es común nuestra fortuna y estado.”¹⁰

Así, tenemos que la educación cívica se relaciona con la formación de un ánimo cívico compartido por la ciudadanía, que refleja el sentido de pertenencia a una comunidad, es decir, el criterio de identidad que implica una formación individual para la convivencia social, lo cual se asocia a un conjunto de ideas que permean los valores y principios que se traducen en las conductas que desarrolla el ciudadano a lo largo de su vida.

Para concluir señalo las siguientes proposiciones.

1. Somos víctimas de un doble discurso que plantea que sin participación no hay democracia, pero como lo hemos señalado, aunque es clara la relación que guarda la participación ciudadana con la democracia, la postura institucional es distinta, al contraponer la participación a la gobernabilidad¹¹. Así, so

pretexto de conservar la gobernabilidad, se difunde una lectura negativa de la participación ciudadana, al condenarla, bloqueándola, tanto de forma discreta, como pública; unas veces mediante el desprestigio de los actores y otras, a través de la intimidación, con el objetivo siempre, de que el Estado no tenga una mala imagen frente a la opinión pública.

2. A pesar de que la educación cívica resulta ser un componente esencial para el fortalecimiento de la Cultura Política, en México no tenemos un modo concreto de impartir la educación cívica a través de programas educativos coherentes, en el que el trabajo de las instituciones públicas se manifieste, pues desafortunadamente se ha considerado que esta obligación le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, que, en el mejor de los casos ha creado algunos materiales informativos sobre derechos constitucionales para los niños de primaria, lo cual implica el desconocimiento de tal institución sobre lo que debería ser el contenido y objetivos de los programas.

3. Uno de los efectos de educar cívicamente al ciudadano es que éstos ejerzan su papel como tales, asumiendo la responsabilidad de participar más activamente no sólo ejerciendo su derecho a sufragar sino custodiando la conducción de los asuntos públicos, dejando el papel de mero espectadores y retomado el de actores, pero esto, desde luego involucra a todas las instituciones públicas, en general, a los medios de comunicación y a la familia misma.

REFERENCIAS

- ALMOND, Gabriel y VERBA, Sidney. *THE CIVIC CULTURE. Political Attitudes and democracy in five nations.* Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1963.

-ALMOND, Gabriel y VERBA, Sidney. *THE CIVIC CULTURE REVISITED.* Little, Brown & Co, U.S.A., 1980.

- ALMOND, Gabriel. *EL ESTUDIO DE LA CULTURA POLÍTICA.* Traduc. de Gustavo López Montiel, Newbury

Park, Sage Publishers, 1990.

- BARBER, James. *EL CIUDADANO POLÍTICO.* Actualidad político-social. Traducción de Emilio Ávila, Editores Asociados, México, 1973.

- BAUDRILLARD, Jean. *PANTALLA TOTAL,* editorial Anagrama, Barcelona, España, 2000.

- BELTRÁN, Ulises y MEYENBERG, Yolanda. *LOS MEXICANOS DE LOS NOVENTA.* UNAM, México, 1996.

- CASTREJÓN, Diez. *LA POLÍTICA SEGÚN LOS MEXICANOS.* Tipografías Editoriales, México, 1992.

- CICERÓN, *LOS OFICIOS O LOS DEBERES,* editorial Porrúa, México, 1990.

- DAHL, Robert. *EL DILEMA DEL PLURALISMO DEMOCRÁTICO.* Alianza editorial, México, 1992.

- DAHL, Robert. *LA POLIARQUÍA. PARTICIPACIÓN Y OPOSICIÓN.* Edit. Rei, México 1996.

-DEMÓCRITO. *LOS PRESOCRÁTICOS,* editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1982.

- DURAND Ponte, Victor Manuel, *CIUDADANÍA Y CULTURA POLÍTICA MÉXICO 1993 – 2001,* Siglo XXI editores, 1ª edición, México, 2004.

- ESPINO, Everardo. *DEMOCRACIA POLÍTICA EN MÉXICO.* Porrúa editores, México, 1993.

- FRIEDMAN, Jonathan, *IDENTIDAD CULTURAL Y PROCESO GLOBAL,* Amorrortu editores, Buenos Aires, Argentina, 2001.

- HABERMAS, Jürgen. *HISTORIA Y CRÍTICA DE LA OPINIÓN PÚBLICA.* La transformación estructural de la vida pública. Editorial G. Gili, México, 1997.

- KAVANAGH, Denis. *POLITICAL CULTURE.* University of Manchester, Edit. Macmillan, USA, 1972.

- KROTZ, Esteban, Coordinador. *EL ESTUDIO DE LA CULTURA POLÍTICA EN MÉXICO.* Perspectivas disciplinarias y actores políticos. Edición del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1996.

- RESTREPO, Gabriel, Et. Al... *CULTURA POLÍTICA Y MODERNIDAD,* Universidad Nacional de Colombia,

En Puebla, el Instituto Electoral del Estado...



...jlo hacemos todos!

1998.

- SEGOVIA, Rafael. LA POLITIZACIÓN DEL NIÑO MEXICANO, Colección Centro de Estudios Internacionales, COLMEX, México, 1975.

- SEGOVIA, Rafael. ¿HAY UNA NUEVA CULTURA POLÍTICA EN MÉXICO? Estudios Sociales, El Colegio de Puebla, Pue, Méx. 1995.

- TOMASETTA, Leonardo, PARTICIPACIÓN Y AUTOGESTIÓN, Amorrortu editores, Buenos Aires, Argentina, 1972.

- TOURAINE, Alan. CRÍTICA DE LA MODERNIDAD, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

- TOURAINE, Alan. IGUALDAD Y DIVERSIDAD. Las Nuevas Tareas de la Democracia. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

- VILLASANTE, Tomás R. (coordinador). LAS CIUDADES HABLAN. Identidades y movimientos sociales en seis metrópolis latinoamericanas. Editorial Nueva Sociedad, Colombia, 1994.

- WINOCUR, Rosalía (coordinadora). ALGUNOS ENFOQUES METODOLÓGICOS PARA ESTUDIAR LA CULTURA POLÍTICA EN MÉXICO, Porrúa, IFE y FLACSO, 1ª edición, México, 2002.

- ZOLO, Danilo, LA DEMOCRACIA DIFÍCIL. Alianza Editorial. 1994.

HEMEROGRAFÍA

Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México, enero-marzo de 2000.

¹ Aunque en ámbito académico encontramos diversos enfoques (Almond y Verba: 1963), considero que la Cultura Política de una nación está formada por el conjunto de conocimientos, ideas, sentimientos y acciones que un individuo desarrolla respecto a su Sistema Político. Así, cada uno de esos componentes se convierte a su vez en un subconjunto que describe la situación del estado que guarda la Cultura Política.

² Una de las formas más comunes de clasificar la participación es en convencional y otra es la no convencional. La convencional tiene como respaldo un conjunto de reglas, aunque, siguiendo a Durand, en un sistema autoritario, también implica que el líder o gobernante cambie las reglas de acuerdo a su conveniencia; por lo que se refiere a la participación no convencional, esta se relaciona con los movimientos sociales, las luchas sociales en contra del sistema autoritario. Al respecto consúltase DURAND Ponte, Víctor Manuel, CIUDADANÍA Y CULTURA POLÍTICA, editorial Siglo XXI, 1ª edición, México, 2004.

³ La argumentación desde la perspectiva institucional es que, para mantener la gobernabilidad, es indispensable contar con instituciones fuertes regidas por el estado de derecho.

⁴ La ola de acontecimientos ocurridos más allá

de la segunda mitad del siglo XX, que repercutieron en la democratización de los regímenes políticos en países del sur y del este de Europa; en Asia, África y Latinoamérica, influyó en la recuperación del concepto. Al entrar la democracia al escenario internacional como forma de gobierno que ofrece mayores ventajas a los gobernantes y a los gobernados, la palabra cívico o cívica da una importante connotación como adjetivo, de ahí que no sea fortuita la aparición de obras como Civic Culture (Almond y Verba: 1963), concepto utilizado por los investigadores para identificar a la Cultura Política de las democracias estables y efectivas.

⁵ Hasta la reforma política de 1990 en la que se da la creación del Instituto Federal Electoral, se integra a su estructura una Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

⁶ Por ejemplo, los niños de nivel básico de 4º, 5º y 6º, reciben un texto gratuito llamado Conoce nuestra Constitución, que de forma gráfica trata brevemente algunos temas como la representación, la división de poderes y las garantías individuales, pero nuevamente la reflexión es que si bien estos temas se relacionan con la educación, no así con la educación cívica. Civismo como materia se reintegró a los planes educativos hasta el año de 1992.

⁷ Véase el pensamiento de Demócrito en LOS PRESOCRÁTICOS, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1982, p. 354.

⁸ El significado de la palabra ciudadano ha variado con el transcurso del tiempo, Diccionario de la real Academia Española de la Lengua en la antigüedad se consideraba ciudadano al habitante de las ciudades o civitas, después sería considerado como vecino de una ciudad que goza de privilegios y está obligado a sus cargas, es decir el reconocimiento de derechos y obligaciones. Así pues, históricamente se le han dado diferentes connotaciones, por ejemplo, la de la Revolución Francesa que consideraba el atributo de ciudadano con carácter honorífico que lo dotaba de igualdad. Pero posteriormente con el constitucionalismo el ciudadano para serlo debe además reunir otros requisitos, como el de la nacionalidad y la edad, y quizá otros impuestos por el Estado-Nación, para adquirir los derechos políticos, así se convierte en sujeto activo del Estado.

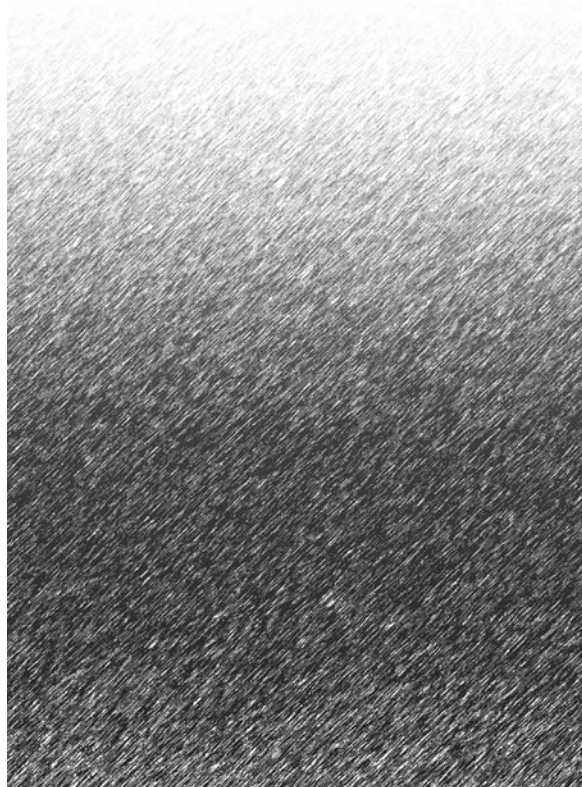
⁹ CLUB, Jean Moulin, EL ESTADO Y EL CIUDADANO. Traducción del francés por Luis Hernández. Edit. Aguilar, Madrid, España, 1977, pág. 177.

¹⁰ CICERÓN, LOS OFICIOS O LOS DEBERES, editorial Porrúa, México, 1990, p. 21.

¹¹ La argumentación desde la perspectiva institucional es que, para mantener la gobernabilidad, es indispensable contar con instituciones fuertes.

La coyuntura económica del Estado de Puebla y su posible incidencia en las preferencias electorales en el 2006

Marcos Gutiérrez Barrón*
Jesús Pablo López**



I. Introducción.

El presente documento tiene como propósito analizar aquellos rasgos coyunturales de la economía poblana que pudieron tener incidencia en las decisiones que en materia electoral tomaron los ciudadanos en el año 2006.

Se reconocen como los factores de mayor incidencia:

- Los altos precios del petróleo en los mercados internacionales, con un importante ingreso de flujo de divisas al país y al estado de Puebla.

- El ingreso por Remesas que los mexicanos que trabajan fuera del país, enviaron a sus familiares, el cual alcanzo altos niveles históricos en el año 2006.

- Un ejercicio del presupuesto federal superior a los años anteriores con una transferencia de recursos también superior a las entidades federativas.

- Factores que contribuyeron a dar mayor estabilidad a la economía y crear un ambiente de relativa prosperidad, que posiblemente indujo a que el ciudadano tratara de mantener lo logrado y no aventurarse en cambios o proyectos inciertos, esto no significa que se ignoraran rezagos existentes a nivel nacional y local.

En la primera parte se realiza un análisis de los indicadores socioeconómicos mas recientes del País y del Estado de Puebla, en la segunda parte se

*Profesor de la UPAEP

**Alumno de la UPAEP y Asistente de Investigación

revisan los factores mencionados que pudieron incidir en las preferencias de los electores al emitir su voto.

II. Evolución de la economía mexicana durante el 2006

De acuerdo a los "Criterios Generales de política económica 2007", de la SHCP, durante 2006 el entorno económico que prevaleció en el ámbito internacional y nacional propició un desempeño dinámico y balanceado de las actividades productivas en México. Por una parte, en la primera mitad del año la demanda externa estuvo impulsada por la aceleración de la producción industrial estadounidense, así como por un aumento sustancial en los gastos de consumo en bienes durables y en inversión no residencial de ese país.

La expansión de la demanda externa se tradujo en un incremento significativo y generalizado de las exportaciones mexicanas, dentro del cual destacó el desempeño de las industrias automotriz, metalúrgica y de alimentos, bebidas y tabaco. Durante los primeros diez meses de 2006 las exportaciones manufactureras de México crecieron a una tasa anual de 17.8 por ciento. La recuperación automotriz fue una consecuencia directa del reacomodo de la producción del sector en Norte América, el cual implicó la fabricación de nuevos modelos en nuestro país.

Los componentes de la demanda interna también tuvieron una expansión importante y balanceada, constituyéndose ésta en un elemento fundamental para apuntalar el crecimiento de la producción nacional. En los primeros seis meses de 2006 el consumo y la inversión del sector privado se incrementaron a tasas anuales de 5.9 y 11.5 por ciento, respectivamente, las mayores tasas para un periodo similar desde 2001 y 1999, en cada caso. Estos resultados se vieron favorecidos por la mejoría en las expectativas de crecimiento del país, por el aumento del empleo formal, por la recuperación de los salarios reales y por la expansión del crédito.

En conjunto, estos elementos ocasionaron que la actividad productiva en México se expandiera de una manera robusta y equilibrada. Durante los primeros tres trimestres de 2006 el valor real del PIB se incrementó a una

tasa anual promedio de 4.9 por ciento, la mayor expansión para un periodo similar desde 2001. Todos los sectores productivos mostraron avances importantes. Por una parte, la producción del sector industrial y la oferta de servicios se incrementaron a tasas anuales de 5.4 y 5.1 por ciento, respectivamente, en tanto que la producción agropecuaria lo hizo en 3.2 por ciento.

En sincronía con el ciclo expansivo de la producción, durante el transcurso del año, el empleo formal registró una mejoría sustancial. En particular, al mes de octubre de 2006 el número de trabajadores afiliados al IMSS tuvo un incremento anual de 885 mil 344 personas; es decir, se expandió a una tasa anual de 6.73 por ciento. Asimismo, el empleo generado en los primeros diez meses del año ascendió a 961 mil 171 ocupaciones, 7.35 por ciento por encima de las plazas registradas al cierre de 2005.

El buen desempeño de la producción, de la demanda y del empleo propició que la expectativa de crecimiento económico del Gobierno Federal para 2006 fuera de 4.7 por ciento, el mayor ritmo de expansión de los últimos seis años. Asimismo, se anticipaba que seguirán presentes las condiciones favorables que impulsaron el crecimiento del gasto interno del sector privado, a saber: la expansión del otorgamiento del crédito bancario para el



consumo y las empresas, así como del crédito hipotecario; y el aumento del empleo formal y de los salarios reales.

En este sentido, los gastos del sector privado destinados a la formación bruta de capital fijo y al consumo se incrementarían a tasas anuales de 9.4 y 5.3 por ciento, respectivamente. Con ello, la inversión crecería a tasas anuales mayores que las del consumo por tres años consecutivos. También se previó que durante 2006 el gasto del sector público fomentara la inversión en capital físico. Como resultado de esta directriz los recursos públicos destinados a la inversión crecerían 9.5 por ciento respecto de los erogados en 2005.

También un incremento en el consumo público a una tasa anual de 5.4 por ciento. La evolución de los componentes de la demanda, induciría un crecimiento anual de 7.1 por ciento en la oferta final de bienes y servicios. Esta proyección se sustentaba en los incrementos anuales de 4.7 y 12.9 por ciento que se anticipaban del PIB y las importaciones totales, respectivamente. Asimismo, la estimación al cierre de 2006 de la inflación era dentro del intervalo de variabilidad estipulado por el Banco de México. En este escenario macroeconómico se prevía déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a 0.3 puntos porcentuales del PIB y con un flujo de inversión extranjera directa cercano a 20 mil millones de dólares. De igual manera, se estimaba que durante 2006 las remesas familiares ascenderían a cerca de 24 mil millones de dólares. En la tabla siguiente se presentan las estimaciones de las principales variables de la economía mexicana

Marco Macroeconómico, 2006-2007 e/

	2006 v	2007
Producto Interno Bruto		
Crecimiento real (%)	4.7	3.6
Nominal (miles de millones de pesos)	9,144.0	9,807.7
Deflactor del PIB (crecimiento promedio, %)	4.3	3.5
Inflación		
Dic./dic. (%)	3.9	3.0
Tipo de cambio nominal */		
Promedio (pesos por dólar de EU)	10.9	11.2
Tasas de interés (Cetes 28 días)		
Nominal promedio (%)	7.2	6.8
Real (%)	3.4	3.9
Cuenta corriente		
Millones de dólares	-2,504.0	-19,926.3
% del PIB	-0.3	-2.3
Balance fiscal		
Balance tradicional (% del PIB)	0.3	0.0
RFSP (% del PIB)	0.8	1.6
Variables de apoyo:		
PIB EE. UU.		
Crecimiento real (%)	3.3	2.5

Producción industrial EE.UU.		
Crecimiento real (%)	4.3	3.0
Inflación EE. UU.		
Dic./dic. (%)	3.4	2.3
Petróleo (canasta mexicana)		
Precio promedio (dls./barril)	53.2	42.5
Plataforma de exportación promedio (mbd)	1,810	1,628
Tasas de interés externas		
LIBOR (promedio, %)	5.2	5.1
Tasa de Fondos Federales (promedio, %)	5.0	5.0

e/ Estimado.

*/ Toda vez que el régimen cambiario es de libre flotación, esta cifra no constituye un pronóstico del tipo de cambio. Sin embargo, para estimar algunos rubros presupuestarios estos niveles de referencia fueron utilizados. www.shcp.gob.mx

en el periodo 2006-7

III. Contexto socioeconómico del Estado de Puebla.

El Estado de Puebla se ubica al oriente del país, con una ubicación estratégica por ser el paso obligado de los principales flujos comerciales a los estados del centro y del sureste del país, así como la puerta del comercio a Europa y otras partes del mundo.

De acuerdo con el II Censo de Población y Vivienda 2005, residen en el estado de Puebla 5 millones 383 mil 133 personas, de las cuales 2 millones 804 mil 469 son mujeres y 2 millones 578 mil 664 son hombres.

Por su volumen de población, el municipio de Puebla es el cuarto más grande del país con 1 millón 485 mil 941 habitantes. Del total de habitantes en el estado, 1 millón 089 mil 843 tienen entre 6 y 14 años de edad, de ellos, 1 millón 013 mil 051 asisten a la escuela, lo que representa 93% del total estatal de este grupo de edad. En Puebla cerca de 550 mil personas hablan alguna lengua indígena, que significa 11.7% del total de población de cinco años y más.

Existen en el estado 1 millón 207 mil 470 viviendas particulares habitadas, es decir, 141 mil 588 más de las que había en el año 2000. De ese total, 42.3% se concentran en cinco municipios: Puebla, Tehuacan, Atlixco, San Martín Texmelucan y San Pedro Cholula.

Se observa que la tasa de crecimiento media anual en el periodo 2000-2005 es similar a la tasa nacional, es decir, 1.0%; misma que de mantenerse, duplicaría la población en 67 años.

1. Distribución geográfica

Al igual que en el 2000, los municipios más poblados de la entidad son: Puebla con 1

millón 486 mil habitantes -- volumen que lo sitúa como el cuarto municipio más grande del país --Tehuacan con 261 mil, San Martín Texmelucan con 130 mil, Atlixco con 122 mil y San Pedro Cholula con 113 mil; en conjunto, estos cinco municipios concentran más de la tercera parte (39.2%) de la población total de la entidad, en una superficie de 1 549.7 km², que apenas representa el 4.5 por ciento del territorio poblano. En contraste, los municipios menos poblados son: San Martín Totoltepec, Coatepec, San Juan Atzompa, San Miguel Ixitlán y La Magdalena Tlatlauquitepec, agrupando en su conjunto 0.06% del total de habitantes, en un espacio superior a 0.4% del suelo estatal.

2. Dinámica del crecimiento de los municipios

Los principales componentes de la dinámica demográfica son, la natalidad, la mortalidad y los movimientos migratorios. Durante el periodo 2000-2005, los municipios con mayor crecimiento fueron: San Andrés Cholula con 6.5% y Santiago Miahuatlán con 4.7 por ciento. Por el contrario, con las menores tasas se ubican La Magdalena Tlatlauquitepec (-8.9%), Chila de la Sal (-7.7%), Piaxtla (-6.4%), Axutla (-5.7%) y Cohetzala con -5.6 por ciento.

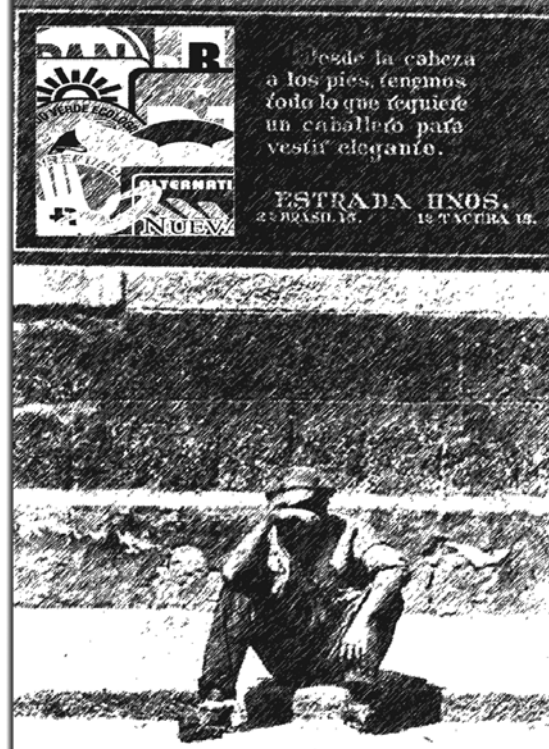
2.Fecundidad

La fecundidad es un componente que incide de manera importante en el crecimiento demográfico y en los cambios de la estructura por edad de la población. la población femenina de 12 años y más, suma 2 millones 049 mil 522. De estas mujeres, casi una tercera parte, 32.4%, no tienen hijos; 36.8% tienen de 1 a 3 hijos; 19.3% han tenido de 4 a 7 hijos; y 8.1% tienen más de 8 hijos. El municipio más poblado en la entidad es Puebla, representa 27.6% de la población estatal. De las mujeres de 12 años o más que lo habitan, quiénes suman 584 mil 269, aproximadamente la tercera parte, 32.8%, no tiene hijos; 45.4 tienen entre 1 y 3; y 18.3% han tenido 4 hijos o más.

En contraposición, el municipio menos poblado es La Magdalena Tlatlauquitepec, con tan sólo 426 habitantes, y una población femenina de 12 años y más de 167, de las cuales 36.5% no tienen hijos; 28.1% tienen entre 1 y 3 hijos; y 33.5% han tenido 4 hijos o más.

3. Migración

En el estado de Puebla existen 4 millones 688 mil 913 habitantes de 5 años y más, de los cuales 96 mil 665 habitaban en octubre del año 2000 en otro estado de la república mexicana,



cifra que representa 2.1% de esa población; por otra parte residían en Estados Unidos de América 7 mil 641 poblados, lo que significa 0.14 por ciento.

4. Educación.

El II Conteo registra 1 millón 089 mil 843 personas de 6 a 14 años de edad, de las cuales 938 mil 192 (86.1%) saben leer y escribir, y 147 mil 861 no han adquirido esta aptitud. Este indicador es similar al registrado en el año 2000. De ese total, 50.2 por ciento son hombres y 49.8% son mujeres.

5. Salud

Sus resultados muestran que en Puebla 34 de cada 100 personas son derechohabientes a un servicio médico otorgado por una institución pública o privada, y 63 forman parte de lo que se conoce como población abierta, la cual es atendida por la Secretaría de Salud o los servicios estatales correspondientes.

6. Lengua indígena

La población de 5 y más años suma 4 millones 688 mil 913 personas, de las cuales 548 mil 723 hablan alguna lengua indígena, siendo 263 mil 717 hombres y 285 mil 6 mujeres. Estas cifras indican que en el quinquenio 2000-2005 se registra un decremento absoluto de 16 mil 786 hablantes de lengua indígena. Del total de la población hablante de lengua indígena, aproximadamente 52 mil personas no hablan español, según su lugar de residencia, del total de hablantes de lengua indígena en el estado, 37.2% habitan en 10 municipios; destacan: Puebla con 42 mil hablantes, Cuetzalan del Progreso con 29 mil y Ajalpan con 23 mil.

7. Vivienda

El número de viviendas particulares habitadas en el estado de Puebla es de 1 millón 179 mil 283, lo que representa un incremento de 150 mil 591 viviendas en los últimos 5 años, lo que implica una tasa de crecimiento medio anual de 2.4%. El promedio de ocupantes por vivienda desciende de 4.8 a 4.4 en el periodo considerado.

Las viviendas con pisos de cemento o firme, madera, mosaico u otros recubrimientos, representan 84.7% respecto al total de viviendas particulares habitadas. En contraparte, la tierra, como material predominante en los pisos, se registra en 14.7% de las viviendas del estado.

En el Estado, 97 de cada 100 viviendas

se registran con energía eléctrica; 85 con agua entubada en el ámbito de la vivienda, y 80 disponen de drenaje; cinco años atrás, estos indicadores fueron de 95, 77 y 66 por ciento respectivamente,

a nivel estatal el bien que tiene mayor presencia en las viviendas es la televisión, ya que alrededor de 87 de cada 100 cuentan con este aparato; una menor proporción de viviendas tiene refrigerador (58%) y lavadora (43 por ciento), en tanto, un 14% cuentan con



computadora.

8. Hogares

Para el año 2005 se registran 1 millón 223 mil hogares, ubicados al interior de las viviendas particulares. En 933 mil 842 hogares (76.4%), el jefe es un hombre y en 289 mil 124 (23.6%) la jefatura es ejercida por una mujer.

9. Economía

La estructura económica la conforman los sectores:

Servicios.
Agrícola
Industrial

Considerando al estado como el mayor centro económico regional, con una gran fortaleza en el sector servicios y el que mayor participación tiene el producto interno bruto de la Región. Los indicadores mas relevantes en el periodo fueron:

Comercio

En el comercio en Puebla, las ventas al menudeo presentaron una variación anualizada de 7.7 por ciento del periodo enero / marzo 2007, que supera las principales plazas. En ventas al mayoreo Puebla está a la punta por zonas metropolitanas.

Apoyado en la derrama económica y la creación de empleos, algunos de los cuales son no remunerados, el comercio en Puebla logro revertir la desaceleración en las ventas, con el resultado de marzo 2007 que arrojo variación puntual de 10.7 por ciento, la más alta en 9 años para ese mes. La variación trimestral es la más alta de 3 años seguidos, lo que supone un récord en el registro de ventas por establecimiento, del comercio moderno según datos oficiales.

Este mayor impulso en el gasto de los poblanos, se explica, por una mayor circulación de dinero que proviene de recursos externos, de la economía informal y también de un relativo repunte del empleo formal de los últimos 12 meses, y a pesar de la carestía se advierte que los precios permanecen quietos por más tiempo, incluso por quincenas; la competencia de autoservicios y centros comerciales incluye en forma explícita descuentos y bonificaciones. Los mayoristas poblanos se resurtieron, con la mayor variación de 4 años seguidos en el periodo trimestral de 8 por ciento.

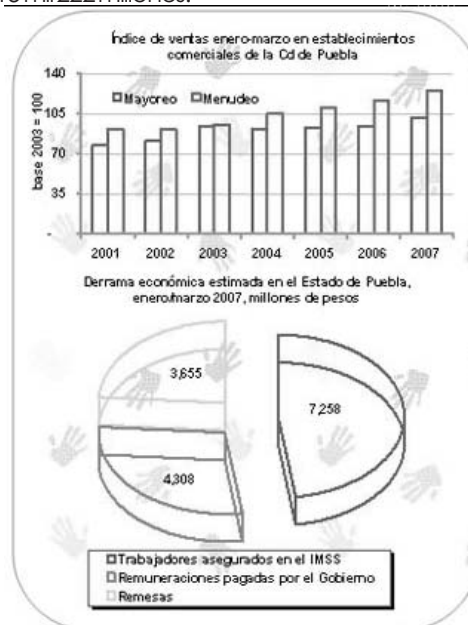
Respecto a la remuneraciones en el sector,

en el primer trimestre del año (Fig.1): Las remuneraciones por persona ocupada caen por tercer año consecutivo en establecimientos al por menor, el promedio trimestral cae una décima de punto adicional que se vuelve más grande, cuando se aplica el índice de precios al consumidor de esta plaza. Un trabajador del comercio mayorista ganó menos en términos reales, que durante el primer trimestre de 2003 y en adelante. En comercio al por menor las remuneraciones caen por segundo año consecutivo, a tasa de menos 1.9 por ciento y también son más bajas, respecto a 2003 y años siguientes.

El personal ocupado en establecimientos al mayoreo mejora sus marcas anteriores, cuando menos desde el 2001, alcanza variación de 5.3 por ciento anualizado, la más alta de 4 años seguidos para un primer trimestre. El personal ocupado al menudeo creció 4.8 por ciento, el año anterior alcanzó 5.2 por ciento también al primer trimestre.

La masa de remuneraciones pagadas a trabajadores del comercio al por mayor creció 5.1 por ciento, al por menor 2.8 por ciento, en su avance gradual contribuyen a retroalimentar la derrama salarial vertida al mercado. Los hogares pueden elevar su ingreso por adición de participantes, excepto por el ingreso personal que se encuentra castigado, no sólo en el comercio.

Se calcula que la masa de remuneraciones pagadas a trabajadores del sector privado, asegurados en el IMSS, alcanzó 7 mil 258 millones de pesos en el primer trimestre del 2007, las remuneraciones pagadas por el gobierno del estado 4 mil 308 millones y las remesas con un monto convertido a pesos de 3 mil 655 millones, lo que arroja en conjunto una derrama económica observable de 15 mil 222 millones."



Turismo

En el año de 2006, el crecimiento del turismo en la entidad fue modesto, las estimaciones de la Secretaría de Turismo (SECTUR) previa una derrama económica por ocupación hotelera y afluencia de visitantes se incrementara en 5%, sólo se logró un aumento de 1% en comparación con el 2005.

De acuerdo al titular de la dependencia, disminuyó el tiempo que permanecen los turistas en el estado de 1.8 días a 1.6 y se redujo la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje, de 11 millones 900 mil pesos cobrados en el año 2005 a 11 millones 200 mil de pesos a finales del año 2006.

Asimismo, de acuerdo con el balance del año que fue presentado por el titular de la SECTUR, el turismo en Puebla dejó una derrama económica de 4 mil 936 millones de pesos, en 2006, cuando en 2005 los ingresos fueron de 4 mil 886 millones de pesos.

La ocupación hotelera en 2006 fue de 55.06%, mientras el año 2005, se ubicó en 54%. En el caso de la afluencia de visitantes, este año llegaron a la entidad 5 millones 779 mil turistas, cuando en 2005 la cifra ascendió a cerca de 5 millones 721 mil personas.

Puebla, de acuerdo con esos datos, tuvo un crecimiento de 1% pese a que la cifra estimada era de 5 por ciento. A la par se redujo en 6% lo que recaudó el gobierno del estado por concepto de Impuesto Sobre Hospedaje.

Así mismo se observó que, los turistas permanecen menos tiempo en la entidad. Mientras en 2004 y 2005 su tiempo de estadía ascendió a 1.8 días, este año disminuyó a 1.6 días.

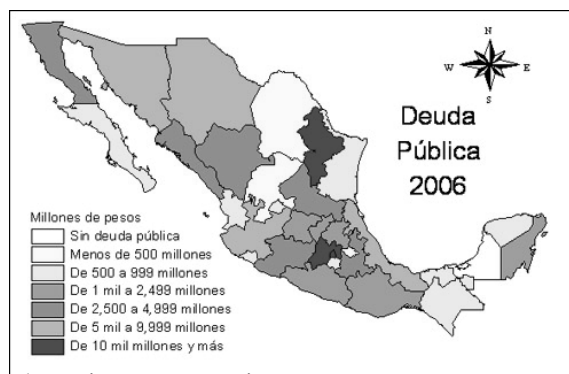
Deuda pública

En el periodo 1993-2006 (Fig.2), la deuda pública de entidades federativas y municipios decuplicó de 16 mil a 160 mil millones de pesos, el Distrito Federal y Estado de México son responsables del 47.5 por ciento del endeudamiento, el Estado de Puebla participa con 2.1 por ciento. En el sexenio 2000-2006 algunos estados reforzaron su endeudamiento; otros los menos, se desendeudaron: Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas. Puebla se encuentra entre los que estimularon el endeudamiento a tasa de dos dígitos, con el

aumento que ocurrió entre 2002-2003 en que la deuda pública se amplió de 1 mil a 2 mil 829 millones de pesos.

La relación entre deuda pública y participaciones en ingresos federales ha mejorado incluso entre 2005-2006 para 21 estados incluyendo Puebla, que descuenta un punto respecto al nivel de 2005, para quedar en 26.1 por ciento.

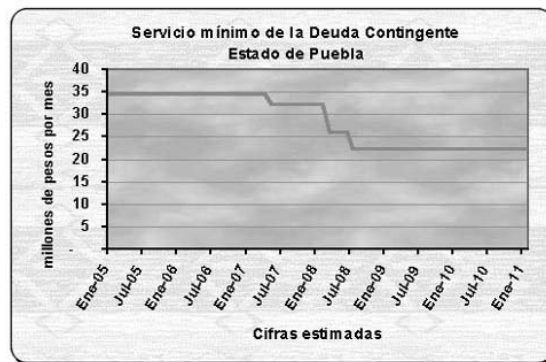
El saldo de la deuda pública por entidades arroja un promedio de 1.8 por ciento del PIB, Puebla está 8 décimas abajo; respecto al tamaño de la economía, en su mejor posición de los últimos 4 años. El crecimiento de la economía es relevante, porque implica mayor recaudación, la posibilidad de revisar tarifas y



elevar ingresos propios.

La deuda contingente del Gobierno del Estado (Fig.3) contiene 5 créditos principales: el crédito otorgado por Banca del Bajío a SOAPAP por 1 mil 577 millones, a tasa de interés interbancaria de equilibrio TIIE de 28 días, más 0.9 por ciento a plazo de 15 años, así como un crédito otorgado por Banobras por 58.75 millones a una mayor tasa.

Por su parte Carreteras de Cuota Puebla percibió un crédito de 150 millones para liquidar en 48 meses; este organismo también obtuvo financiamiento de Banobras por 500 millones a plazo de 15 años. El Fideicomiso de la Reserva Atlxícayotl obtuvo de HSBC, 196 millones para



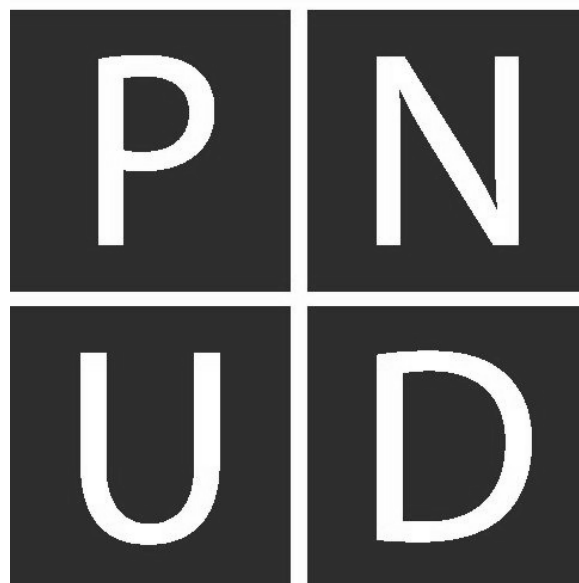
liquidar a 39 meses.
Bienestar laboral

La ONU no le otorga una buena calificación al Estado de Puebla en materia de bienestar laboral dentro del entorno nacional.

De acuerdo al índice de Competitividad Social 2007, en Puebla 6 de cada 10 trabajadores no tienen acceso al Seguro Social, alrededor del 30% de la población vive del comercio informal y ocupa el 21 en cuanto a la pobreza salarial. Según este índice, los trabajadores se enfrentan al exceso de carga de trabajo o no alcanzan a cubrir la jornada promedio.

Para calcular el índice de Competitividad Social se "mide la competitividad de 32 ciudades del país, basándose en cifras de 2006, sobre generación de empleos, trabajo infantil, seguridad social, intensidad de la jornada laboral, formalidad en el empleo y pobreza salarial. Elementos que consideran los especialistas, generan bienestar entre la población." Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según el mismo PNUD, "Puebla se encuentra en los últimos lugares o debajo de la media nacional en cinco rubros. El caso más extremo es el de 'Acceso a servicios de Salud', al



ubicarse en el lugar 29 de las 32 evaluados, lo que significa que seis de cada 10 trabajadores no cuenta con algún tipo de seguridad social por parte de las empresas donde trabajan."

Además se dice que:

"En materia de trabajo infantil, la capital de estado tiene una ligera mejoría, pero no se encuentra entre las 10 ciudades con el mejor porcentaje. En el estudio se sitúa en el lugar 11 y se estima que el 12 por ciento de los trabajadores contratados son menores de 15 años de edad."

"En la intensidad de la jornada laboral, la ciudad se colocó en el lugar 19, con 40 por ciento de su población que no tiene un horario de trabajo deseable, de 25 a 48 horas a la



semana. Se ubica muy lejos de ciudades como Chihuahua, La Paz y Tijuana en donde casi 80 por ciento cumple con una jornada justa. En Tuxtla Gutiérrez, Pachuca y Tlaxcala cerca de 50 por ciento de los individuos laboran fuera del rango semanal deseable."

- "El empleo informal es un problema que se agudiza en la zona sur-sureste del país y Puebla está en el lugar 24 de las 32 ciudades urbanas estudiadas. Aquí tres de cada 10 personas trabajan de manera informal."

- "La pobreza salarial muestra la proporción de trabajadores con salario que les permite por estar arriba de la línea de pobreza, ahí la capital aparece en lugar 21 de los 32 evaluados en el ranking."

Pobreza y rezago Social.

Los datos que aquí se presentan son el resultado de las actividades desarrolladas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la dimensión de la pobreza por ingresos se estimó a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2005 y de los resultados definitivos del II Censo de Población y Vivienda, 2005; caracterizando a los hogares y personas en situación de pobreza en tres niveles: alimentaria, de capacidades y

de patrimonio. El Índice de Rezago Social se construye a partir de las otras dimensiones de la pobreza que marca la Ley, agrupando a las entidades federativas, municipios y localidades en diferentes grados de rezago social.

De acuerdo con la metodología para la medición de la pobreza por ingresos, se definen tres niveles de pobreza:

- La pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.

- La pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines.

La pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

En el Cuadro 1 se puede apreciar que la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria es el estado de Chiapas, dado que 47.0 por ciento de su población se encuentra en esta situación. Le siguen los estados de Guerrero con 42.0 por ciento, Oaxaca con 38.1, Tabasco con 28.5, Veracruz con 28.0 y Puebla con 26.7. Por el contrario, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California con 1.3 por ciento, Nuevo León con 3.6, Baja California Sur con 4.7, Distrito Federal con 5.4 y los estados de Coahuila y Chihuahua con 8.6 por ciento.

El ordenamiento de la situación de la pobreza de capacidades es prácticamente la misma que para la alimentaria. En primer lugar se encuentra Chiapas con 55.9 puntos porcentuales reportados, le sigue el estado de Guerrero que reporta 50.2 y Oaxaca con 46.9.

De acuerdo con las estimaciones, los estados con mayor pobreza de patrimonio son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 75.7, 70.2 y 68.0 por ciento, respectivamente. Esta información nos permite apreciar con claridad que el abatimiento de la marcada desigualdad entre los estados de la República constituye un importante desafío para el país.

Mientras que Baja California tiene un ingreso mensual promedio per cápita por hogar estimado de \$4,998.00, el de Chiapas alcanza \$1,215.00, lo cual se refleja en la diferencia de pobreza de ambos estados: en Baja California la incidencia de la pobreza de patrimonio es de 9.2 por ciento, mientras que en Chiapas alcanza 75.7 por ciento.

Al analizar la participación porcentual de cada entidad federativa en la pobreza nacional (Cuadro 2), se aprecia que el estado con mayor número de personas pobres alimentarias es Chiapas (2.0 millones de personas), seguido de Veracruz y el Estado de México (2.0 millones, cada uno) y Puebla (1 436 555) de igual modo, se puede notar que son estos mismos estados los que contribuyen con el mayor número de personas pobres en las líneas de capacidades y de patrimonio.

Tomando en cuenta que la Ley General de Desarrollo Social, LGDS, establece que la medición de la pobreza debe considerar el carácter multidimensional de la pobreza, el CONEVAL construyó el Índice de Rezago Social, incorporando indicadores de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. Los datos empleados se obtuvieron de los resultados definitivos del II Censo de Población y Vivienda 2005.

El Anexo, el Cuadro, muestra los indicadores multidimensionales de pobreza para cada estado, así como el Índice de Rezago Social, el cual es una medida sintética de las dimensiones consideradas. Los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, tienen un muy alto grado de rezago, lo cual coincide también con su alta incidencia de pobreza de ingresos.

IV. Factores de Incidencia.

1. Precio del petróleo en 2006

El mercado petrolero internacional se caracterizó por una tendencia alcista de los precios, aunque con una pronunciada volatilidad, registrando varios máximos históricos nominales. Desde fines de 2005 y hasta mediados de julio de 2006, el precio del crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) registró un incremento de 26.2 por ciento al pasar de 61 a 77 dólares por barril (dpb). El precio promedio durante este período fue de 67.44 dpb, 29.6 por ciento mayor al precio promedio observado en igual período de 2005 (52.06 dpb).

Posteriormente, su cotización se redujo significativamente, de tal forma que al 15 de noviembre el precio ha descendido 18.27 dpb (23.7%) respecto del máximo nominal del año. La mezcla mexicana mostró un comportamiento similar, por lo que su precio

Cuadro 1
Porcentaje de población en situación de pobreza por ingreso, 2005

Entidad federativa	Pobreza alimentaria	Pobreza de capacidades	Pobreza de patrimonio
Chiapas	47.0	55.9	75.7
Guerrero	42.0	50.2	70.2
Oaxaca	38.1	46.9	68.0
Tabasco	28.5	36.6	59.4
Veracruz	28.0	36.3	59.3
Puebla	26.7	35.3	59.0

Cuadro 2
Número de personas en situación de pobreza y su distribución porcentual estatal, 2005

Distribución porcentual estatal de las personas en pobreza tipo de Pobreza				Personas en condición de pobreza tipo de Pobreza		
Entidad federativa	Pobreza Alimentaria	Pobreza de Capacidades	Pobreza de Patrimonio	Pobreza Alimentaria	Pobreza de Capacidades	Pobreza de Patrimonio
Chiapas	10.8	9.2	6.5	2,017,517	2,399,233	3,248,450
México	10.7	12.1	14.0	1,999,076	3,133,143	6,986,775
Veracruz	10.6	9.9	8.5	1,990,503	2,581,256	4,216,024
Puebla	7.7	7.3	6.4	1,436,555	1,899,948	3,174,228
Oaxaca	7.1	6.3	4.8	1,337,597	1,644,680	2,384,776

creció 18.13 dpb del cierre de 2005 a principios de agosto de 2006, lo que representó un crecimiento de 38.8 por ciento.

La tendencia alcista que registraron los precios del petróleo en la primera mitad del año fue resultado del elevado crecimiento de la economía mundial, que ha incidido en un crecimiento también elevado de la demanda, frente a un bajo crecimiento en el abastecimiento de hidrocarburos, el cual se encuentra muy cerca de la capacidad de generación de fluidos de los yacimientos en las distintas regiones productoras del mundo. Asimismo, los elevados precios y su alta volatilidad han sido el resultado de temores por la interrupción del suministro del crudo debido a problemas geopolíticos en Nigeria, Ecuador, Rusia, Irak, el conflicto entre Israel y Líbano, así como la persistente crisis en torno del programa nuclear de Irán.

Lo cierto es que la demanda del hidrocarburo se ha mantenido sólida, fundamentalmente por el crecimiento económico observado en China y Estados Unidos. En particular, desde el año 2000 a la fecha, el crecimiento de la demanda en China explica un tercio del incremento del consumo de petróleo mundial. La producción de crudo



estadounidense en el Golfo de México se recuperó lentamente de los daños causados durante la temporada de huracanes en 2005. Por su parte, la producción en países de la OPEP también se ha visto restringida en virtud de su reducida capacidad de producción excedente.

Asimismo, en los primeros días de agosto, la compañía petrolera BP (British Petroleum) anunció que interrumpiría temporalmente sus actividades en el campo petrolero de Prudhoe Bay, en Alaska, debido a una falla en un oleoducto y un pequeño derrame de petróleo. Cabe mencionar que en dicho campo se extrae el 8 por ciento del crudo de los Estados Unidos.

Por otro lado, a lo largo de 2006 los inventarios de petróleo en los Estados Unidos se han ubicado en niveles superiores a los registrados en los últimos cinco años. Actualmente, el nivel de inventarios representa el 74 por ciento de la demanda mensual, un punto porcentual mayor al nivel observado en 2005 (73%), y superior al promedio de los últimos cinco años (66%). Esta coexistencia de precios altos con inventarios elevados, se explica por un incremento de las compras de precaución.

Los consumidores de petróleo crudo, ante el temor de una caída abrupta en la producción o de una reducción en la tasa de crecimiento de la oferta, deciden acumular reservas para hacer frente a la eventual escasez. Además, se anticipaba que en el mediano y corto plazo persistirán factores de



incertidumbre en el mercado que justifican la expectativa de precios elevados.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de los Estados Unidos, previa que en el invierno se registrarán temperaturas más bajas que el año anterior, también los riesgos geopolíticos con efectos en la producción de crudo de los principales países productores:

1. En Irak, la producción del hidrocarburo se ha reducido desde el conflicto armado y no muestra signos de recuperación. La conformación del nuevo gobierno, reformas a la ley de hidrocarburos, la implementación de reformas económicas, entre otros asuntos, pueden tomar bastante tiempo. El riesgo de posibles retrocesos es particularmente elevado, por lo que es probable que la producción de petróleo siga contrayéndose.

2. Durante los últimos dos años la producción de crudo en Irán se ha estancado, mientras que la demanda interna del hidrocarburo ha aumentado, de tal forma que sus exportaciones se han reducido sustancialmente. Además, la crisis en torno a su programa nuclear no ha sido resuelta.

3. La producción de crudo en Nigeria se ve amenazada por el aumento de la violencia en las zonas productoras. De acuerdo con analistas políticos, los conflictos en el país parecen no tener una solución en el corto plazo.

4. En Venezuela, la producción de petróleo se ha estancado y, de acuerdo con opiniones de varios analistas, es poco probable que se recupere en el mediano plazo.

Así, ante el escenario del mercado petrolero, caracterizado por un sostenido crecimiento esperado en la demanda, reducida capacidad de producción excedente, riesgos geopolíticos y climatológicos, anticipaba precios elevados del crudo durante 2006 y principios de 2007.

2. REMESAS

De acuerdo con información del Banco de México, en 2006 la cuenta de transferencias presentó un superávit de 23,452 millones de dólares. El principal componente





de esta cuenta es el de las remesas que los residentes en el exterior de origen mexicano envían a sus familiares en México. En 2006 dicho ingreso ascendió a 23,054 millones de dólares, lo que implicó un incremento de 3,019 millones y de 15.1 por ciento.

Cabe señalar que el ritmo de crecimiento de las remesas se desaceleró de manera significativa a lo largo de 2006, al pasar de 27.5 y 19.7 por ciento en el primero y segundo trimestres, a 10.6 y 5.5 por ciento en el tercero y cuarto (cuadro anexo). Esta evolución se explica por diversos factores, entre los que destacan: a) la mejoría en la cobertura de las operaciones de remesas influyó al alza en tal estadística en los años previos, pero su efecto se ha ido atenuando gradualmente; b) los mayores problemas

que han enfrentado los trabajadores mexicanos para emigrar hacia Estados Unidos, como resultado de una creciente vigilancia fronteriza en ese país; y, c) las dificultades adicionales que han enfrentado en Estados Unidos los inmigrantes mexicanos indocumentados para encontrar trabajo, ante controles oficiales más estrictos en un contexto de desaceleración de la economía estadounidense.

El monto de remesas en 2006 superó tanto al saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros como al flujo de inversión extranjera directa. Asimismo, dicho ingreso de recursos fue equivalente a 2.7 puntos porcentuales del PIB. En el año de referencia, se efectuaron 65.8 millones de envíos de remesas, con un valor promedio de 350 dólares por envío. La distribución de las remesas familiares por entidad federativa muestra que los principales estados receptores de tales recursos fueron Michoacán, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y el Distrito Federal. En su conjunto esas cinco entidades captaron el 43 por ciento del total de remesas que recibió el país, y le siguen los estados de Veracruz y Puebla.



Año 2006
Millones de Dólares

Mich	2,472	(10.7)	porcentajes respecto del total
Gto	2,055	(8.9)	
Jal.	1,993	(8.6)	
Méx.	1,926	(8.4)	
D.F.	1,551	(6.7)	
Ver.	1,415	(6.1)	
Pue.	1,386	(6.0)	

El Banco Mundial (BM) reveló que México desplazó en 2006 a India como el mayor receptor de remesas en el planeta, con un ingreso previsto de 25 mil 38 millones de dólares para este año, cifra superior a los 23 mil 548 millones de dólares que captará la nación asiática, cuya población, de mil millones de habitantes, es nueve veces mayor a los 105 millones de mexicanos.

Los datos, del organismo financiero internacional al 21 de noviembre, dan cuenta de que entre 2001 y 2006, las remesas representaron para

México un ingreso de divisas por 108 mil 591 millones de dólares. Es una cantidad 166 por ciento superior al saldo de la deuda externa del gobierno mexicano,

que a septiembre de este año se situó en 40 mil 687 millones de dólares, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El ingreso de remesas a México en el periodo 2001-06, es superior en 205 por ciento al registrado en periodo anterior 1994-2000, cuando alcanzó 35 mil 538 millones de dólares, según los datos ofrecidos por el Banco Mundial.

La emigración hacia Estados Unidos ha crecido de manera sostenida. Estimaciones oficiales calculan que cada año el número de mexicanos que cruzaron la frontera va de 400 mil a 500 mil, un flujo de personas que explica el

aumento del volumen de remesas familiares, como también lo explica el hecho de que esos recursos se mueven cada vez más por canales formales y a través del sistema financiero, lo que permite llevar un mejor registro del volumen.

En un estudio titulado, Implicaciones económicas de las remesas y la migración, el Banco Mundial estableció que, en el caso de México, las remesas han contribuido señaladamente a reducir la pobreza. Representan 15 por ciento del ingreso per cápita en las zonas rurales; también, de acuerdo con el estudio, son responsables del total del capital en 20 por ciento de las empresas pequeñas en las zonas urbanas, proporción que aumenta a un tercio en los 10 estados con mayor migración a Estados Unidos.

En el Estado de Puebla, de acuerdo a los indicadores del Banco de México, las

remesas este año de 2007, han rebasado a la inversión privada, esto le ha permitido subir al sexto sitio, con 332.5 millones de dólares, Puebla representó 6.2 por ciento de las remesas que arribaron al país en el primer trimestre del año 2007.

Remesas familiares

País	2000*	2006*	población**
México	7, 525	25, 038	103
India	12, 890	23, 548	1, 095
China	6, 244	22, 492	1, 313
Filipinas	6, 212	14, 923	89
Francia	8, 631	12, 742	61

* Millones de dólares. Fuente: Banco Mundial, 2006

**Millones de personas. Fuente: CIA, World Fact Book, 2006

LA JORNADA

En el primer trimestre del año pasado los flujos de remesas para Puebla se ubicaron en niveles de 293.9 millones de dólares, con lo que ya descontada la inflación de 4.73 por ciento tuvieron un crecimiento de más del 8 por ciento en términos reales.

La entidad solo es superada por Michoacán con 10.46 por ciento de los flujos por concepto de remesas por 560.8 millones de dólares; Jalisco con el 9.2 por ciento y 493.3 millones de dólares; Guanajuato con 9.13 por ciento y 489.4 millones de dólares; Estado de México con 7.92 por ciento y 424.8 millones de dólares, y Distrito Federal con 6.59 por ciento y 353.6 millones de dólares.

En conjunto las seis entidades, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal y Puebla, concentran más del 49.5 por ciento de las remesas canalizadas al país, esto es unos 2 mil 653 millones de los 5 mil 360 millones de dólares que ingresaron al país en el primer trimestre del año por concepto de remesas de migrantes en el exterior.

En lo que va del actual gobierno poblano las remesas de migrantes suman 2 mil 895.2 millones de dólares, y la inversión local, nacional y extranjera entre 2005 y 2006 en Puebla asciende a una cantidad menor, de 23 mil 013 millones de pesos, unos 2 mil 112 millones de dólares.

De hecho el peso de las remesas de migrantes para Puebla con respecto a la inversión extranjera directa (IED) se mantiene en ascenso; en 2003 rebasaron 35.5 por ciento a la IED, mientras que en 2005 fueron 55.5 por ciento mayores y en el primer semestre del 2006 hasta 78.5 por ciento superiores a los capitales foráneos.

La tendencia de aumento en las remesas de migrantes poblanos que crecieron



482.6 por ciento en los últimos tres años continuará en el corto plazo, tras la salida de más de 30 mil poblanos al año a Estados Unidos.

3. Ejercicio del presupuesto federal.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Entre 2000 y 2006, el fortalecimiento de la postura fiscal y el incremento del gasto público se ha sustentado en los ingresos petroleros asociados a la evolución favorable de los precios del crudo en los mercados internacionales, así como en la obtención de mayores ingresos no petroleros, que aumentaron como proporción del producto aún cuando en estos años se llevó a cabo una reducción de tasas y se otorgaron diversos estímulos en el ISR con el fin aumentar la competitividad de la economía y fomentar la inversión.

Cabe señalar que las entidades federativas durante 2006 recibieron recursos adicionales por 56.1 miles de millones de pesos (Mmp), que provienen de ingresos petroleros excedentes (DEEP y ARE), 19.5 Mmp, y por

Ingresos excedentes 2006 (Miles de millones de pesos)

	Total 278.6
1. Entidades Federativas	56.1
ARE	6.5
DEEP	13.0
Participaciones	36.6
2. Entidades de control directo	121.7
PEMEX	99.0
Resto	22.7
3. Dependencias	32.1
4. Aportaciones al FEIP	28.4
5. Mejorar el balance público	28.4
6. Otros	*/11.9

*/ Incluye el mayor gasto en desastres naturales, costo de combustibles, Adefas y obligaciones fiscales de ejercicios anteriores.



participaciones, 36.6 Mmp. Si se considera el pago correspondiente al cuarto trimestre del año de los ingresos petroleros excedentes generados en 2006, los recursos adicionales destinados a las entidades federativas serán de 61.0 Mmp. Así, en resumen, los ingresos excedentes se distribuyen de la siguiente forma:

También se consideró lo observado hasta septiembre para actualizar la estimación de los ingresos tributarios no petroleros. Como resultado de estas modificaciones, se estima que los ingresos presupuestarios serán mayores en 278.6 Mmp a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2006, de los cuales 110.0 Mmp corresponden a ingresos petroleros y 168.6 Mmp a ingresos no petroleros.

Por su parte, el destino de los ingresos excedentes conforme a las disposiciones vigentes será el siguiente: 19.5 Mmp para las entidades federativas por concepto de la recaudación del derecho extraordinario por exportación de petróleo (DEEP) y del aprovechamiento sobre rendimientos excedentes (ARE) correspondientes a los tres primeros trimestres del año, que se generan por un precio del petróleo mayor a lo previsto en la LIF2006. Si se agrega el pago del cuarto trimestre que se realizará en febrero de 2007, este monto aumenta a 24.4 Mmp.

Estos factores, mayores ingresos provenientes de altos precios del petróleo, de las remesas familiares y del presupuesto de la federación, influyeron en las decisiones de los ciudadanos con los resultados electorales que ya son conocidos.

De la información que contiene el presente documento así como de los argumentos que se mencionan, abre la posibilidad del desarrollo de futuras líneas de investigación, una de las cuales puede ser la medición de la correlación entre bienestar económico y preferencia electoral.

Principales fuentes de consulta:

INEGI II Censo de población y vivienda 2005
<http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/conteos/conteo2005/default.asp?c=6224>

PNUD. Índice de Competitividad Social 2007, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo económico primer semestre año 2007 N° 1

<http://saul.nueve.com.mx/competividad/imagenes/Boletin%20Indice%20de%20competitividad%20Social.pdf>

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL
<http://www.coneval.gob.mx/coneval/>

Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
<http://www.shcp.gob.mx/>

SHCP Criterios Generales de política económica 2007 <http://www.shcp.gob.mx/>

SHCP. Criterios Generales de política económica 2006 <http://www.shcp.gob.mx/>

BANXICO Ingresos por remesas familiares, distribución por entidad federativa.
<http://www.banxico.org.mx/>



Las precampañas en el Estado de Puebla

(Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete)

Amalia Oswelía Varela Serrano*

INTRODUCCIÓN

En fecha doce de diciembre de dos mil seis la Quincuagésimo Sexta Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla aprobó diversas reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (CIPEEP), dentro de las cuales se incorpora la figura de precampañas electorales.

De la exposición de motivos de dichas reformas se deriva que la intención del legislador fue la de regular expresamente aquellos actos de proselitismo adelantado realizado por ciudadanos que manifiesten públicamente su intención de aspirar a un cargo de elección popular, conocidos comúnmente como precampañas, considerando que con las citadas reformas quedan salvaguardados los derechos y prerrogativas de los partidos políticos de realizar precampañas para elegir a los ciudadanos que presentarán como candidatos a cargos de elección popular, previendo que los ciudadanos que realicen actividades propagandísticas y publicitarias de precampaña, se deberán ajustar a los plazos y disposiciones establecidos en el Código Comicial Estatal con la prevención que de no hacerlo, se les negará el registro como candidatos.

En este sentido, el primer ejercicio de aplicación de esta incipiente figura de precampañas se da durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete, donde la principal regulación de los actos de precampaña se encuentra reflejada en los numerales 52 bis y 200 bis del CIPEEP, artículos que son base en la realización de este trabajo.

*Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación de Instituto Electoral del Estado.



Asimismo, dentro de las reformas realizadas al artículo 89 fracción V del CIPEEP, el Legislador facultó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado a expedir la normatividad reglamentaria que de manera particular regulará los diversos aspectos que comprende la figura de precampañas. En este tenor, en el año dos mil siete el Consejo en mención aprobó el Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral del Estado, los Lineamientos para la presentación y fiscalización de informes de precampañas electorales y los Lineamientos para el monitoreo de las precampañas electorales en los medios de comunicación.

Derivado de las reformas en estudio, de la expedición de la reglamentación señalada y de acuerdo a la experiencia adquirida con la primera aplicación de dichas normas durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete en el Estado de Puebla, el presente trabajo tiene como fin ubicar las principales problemáticas a las que se enfrentaron los diversos actores electorales en la aplicación de las diversas disposiciones en materia de precampañas y presentar soluciones a dichas dificultades.

Agradezco infinitamente el apoyo brindado para la realización de este documento por parte de la Lic. Rosa Margarita Méndez Trujillo y la C.P. Iris del Carmen Conde Serapio, personal adscrito al Departamento de Partidos Políticos y el correspondiente a Fiscalización, de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación del Instituto Electoral del Estado; así mismo agradezco la orientación y el consejo del Mtro. José Antonio Bretón Betanzos para la conclusión del mismo.

I. PROBLEMÁTICAS EN LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRECAMPAÑAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

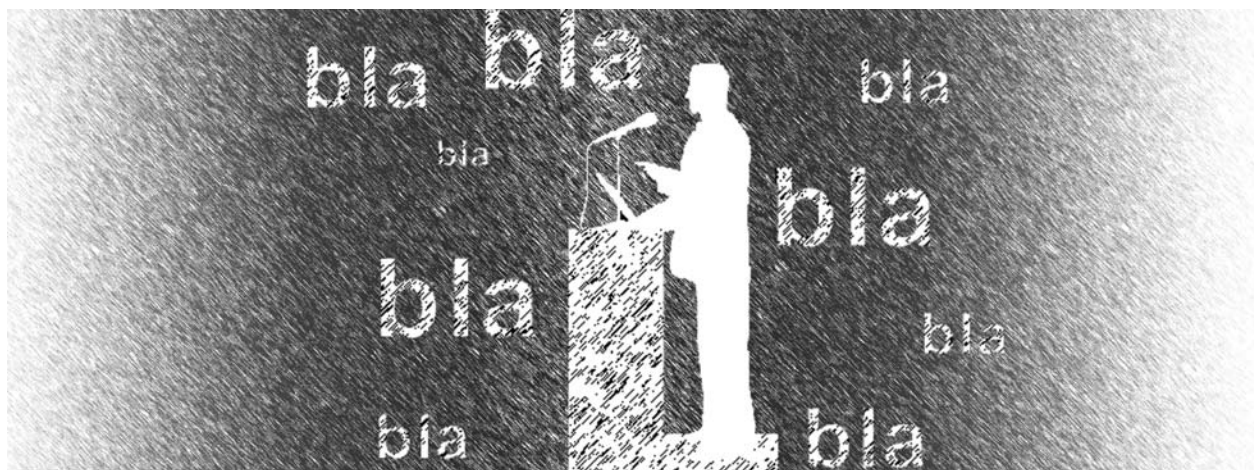
A) Uno de los primeros problemas que puede observarse en cuanto a las reformas aprobadas consiste en que dentro de la exposición de motivos, el legislador consideró que ninguna precampaña duraría más de la mitad del período de campaña de la elección que corresponda, sin embargo, la intención señalada no fue plasmada en el texto de las reformas, lo que se advierte en el artículo 200 bis Apartado B fracción II del Código de la materia, el cual señala:

"ARTÍCULO 200 BIS.-...

B. Del inicio y término de las precampañas:

I.- Los procesos internos de los partidos políticos o coaliciones, orientados a seleccionar a sus candidatos que habrán de contender en las elecciones a que se refiere este Código, sólo podrán realizarse durante el año de la elección de que se trate, a partir del inicio del proceso electoral y deberán concluir necesariamente a más tardar diez días antes del inicio del período de registro de candidatos de la elección de que se trate;

II.- Las precampañas se iniciarán a partir de los treinta días siguientes de iniciado el proceso electoral y concluirán en los plazos señalados en la fracción anterior. Su duración será en



el plazo que fije la normatividad interna del partido político correspondiente, pero en ningún momento podrán iniciar o concluir antes de este plazo. El tiempo se computará a partir de la fecha en que los aspirantes, en términos de la convocatoria respectiva, queden debidamente registrados ante los órganos responsables de la preparación, organización, conducción y validación del proceso interno;

..."

En este sentido, es necesario considerar lo dispuesto en los numerales 186 y 206 del CIPEEP, en términos de los cuales el Proceso Electoral Ordinario inicia con la primera sesión del Consejo General que debe celebrarse durante la segunda semana del mes marzo; y el período de registro de candidatos abarca la última semana del mes de agosto para el caso de candidatos a Gobernador, Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de los Ayuntamientos, así como la primera semana del mes de septiembre para el registro de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional.

Asimismo, en los dispositivos 191 y 217 del CIPEEP, las campañas electorales podrán iniciar al día siguiente de concluida la Sesión de registro de candidatos que efectúe el Consejo Electoral competente y concluir tres días antes de la jornada electoral (segundo domingo del mes de noviembre).

En este orden de ideas, tenemos que el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete

inició en fecha quince de marzo del año en curso y el registro de candidatos comprendió los períodos del veinte al veintiséis de agosto y del tres al nueve de septiembre de dos mil siete, para los distintos cargos de elección popular.

En tales términos, podemos derivar que los partidos políticos estaban en posibilidad de realizar precampañas a partir del catorce de abril y hasta el nueve de agosto para el caso de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de los Ayuntamientos o hasta el veintitrés de agosto para los candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, lo que significó una duración de cerca de cuatro meses para el primer caso y de más de cuatro meses para el segundo.

En el caso de las campañas, los partidos políticos estuvieron en posibilidad de iniciar las mismas el veintisiete de agosto de dos mil siete, debiendo concluir todas ellas a más tardar el siete de noviembre del mismo año, lo que implicó que la duración de las mismas fuera de un poco más de dos meses, representando para el Proceso Electoral dos mil siete que las campañas de Ayuntamientos y Diputados por el principio de Mayoría Relativa pudieran durar setenta y tres días y sus respectivas precampañas ciento dieciocho días, lo que implica que la precampaña pudo durar treinta y ocho por ciento más que la campaña.

De igual forma y en el supuesto de que los candidatos a Diputados de representación proporcional hubieran realizado campaña, la duración de la misma pudo ser de cincuenta y nueve días y la duración de sus respectivas precampañas de ciento treinta y dos días, lo que implica que la precampaña pudo durar cincuenta y cinco por ciento más que la campaña.

Lo anterior, deja de manifiesto que contrario a lo expuesto por el Legislador en la exposición de motivos, las reformas aprobadas abrieron la posibilidad de que las precampañas electorales puedan tener una duración aproximadamente de hasta el doble del tiempo concedido para campañas electorales, por lo que lo procedente es reformar el Código de la materia a fin de considerar dentro de su texto que ninguna precampaña durará más de la mitad del período de campaña de la elección que corresponda.

B) Un segundo problema relacionado con el anterior, se puede advertir en lo señalado en el artículo 200 bis Apartado B fracciones I y II (disposiciones que ya fueron transcritas en el



inciso anterior), ya que para la determinación de los plazos de inicio y conclusión de los procesos internos y precampañas de los partidos políticos, el Legislador no previó que la cercanía entre el proceso interno y el inicio del registro de candidatos implicaba que en caso de que algún aspirante a candidato ejerza alguna de las acciones previstas en la ley y en los propios estatutos de los partidos políticos cuando considere que en dichos procesos internos violen o desconozcan sus derechos, las resoluciones que en su caso emita la autoridad jurisdiccional competente, origine que el organismo electoral deba sustituir a los candidatos a los que ya había otorgado el registro correspondiente, en acatamiento a dichas resoluciones.

Dicha hipótesis se actualizó durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete, en el cual debido a las resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue necesario modificar en dos ocasiones la integración de la planilla de miembros de Ayuntamiento del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez registrada por la Coalición Unidos para Ganar (PRI-PVEM), debido a los recursos interpuestos por los precandidatos que en primera instancia no habían sido electos como candidatos en el respectivo proceso interno.

Al respecto, es importante precisar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó el registro de la planilla presentada por la Coalición referida, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil siete, posteriormente y en virtud de la primera resolución dictada por el Tribunal antes citado se realizó la sustitución del candidato a Presidente Municipal propietario el siete de septiembre del año en curso, es decir, siete días después de aprobado el registro. Asimismo, en cumplimiento a la segunda resolución emitida por la Sala Superior en comentario, el Instituto procedió a sustituir al resto de los integrantes de la planilla en fecha veintiséis de octubre de dos mil siete.

De tal situación podemos observar que en especial las sustituciones originadas por la segunda resolución emitida por el Tribunal importan una gran trascendencia en virtud de que durante casi dos meses se realizó campaña electoral por una planilla integrada por ciudadanos que finalmente no contendieron en la jornada electoral creando incertidumbre en el electorado, además de que tal situación implicó inconvenientes técnicos, ya que fue necesario retrasar la impresión de las respectivas boletas electorales.

Por lo anterior y considerando la propuesta planteada en el inciso A del presente



trabajo de que las precampañas duren no más de la mitad del período de campaña de la elección que corresponda, la propuesta consiste en que dichas precampañas comiencen a partir de los treinta días siguientes de iniciado el proceso electoral, como actualmente se encuentra el texto de la ley en comentario, pero que estas concluyan a más tardar sesenta días antes del inicio de los plazos de registros de candidatos correspondiente, lo cual traerá como consecuencia contar con tiempo suficiente para proceder, antes del registro de candidatos, a acatar cualquier cambio ordenado por autoridad jurisdiccional y en su momento realizar el proceso de fiscalización correspondiente.

C) Otra dificultad fue precisamente la duración del proceso de fiscalización de los gastos reportados en precampaña, el cual inicia una vez recibidos los informes correspondientes por parte de los partidos políticos como se desprende de lo señalado en los numerales 52 bis Apartado C fracción I y 200 bis Apartado C fracciones V y VI del CIPEEP, que refieren:

“ARTÍCULO 52 bis.- Los partidos políticos deberán rendir ante la comisión correspondiente del Instituto, los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

A. Informes anuales:

...

B. Informes de campaña:

...

C. Informes de

precampaña:

I.- A más tardar dentro de treinta días siguientes a que concluya la selección de candidato, fórmula o planilla, los partidos políticos entregarán un informe detallado de los gastos aplicados por cada una de las precampañas, para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos respectivamente, dependiendo la elección de que se trate; y

II.- Los informes definitivos de gastos de precampaña deberán especificar los montos de los ingresos, así como su aplicación en los términos y proporciones que este Código establezca."

"ARTÍCULO 200 BIS.- ...

C. Del tope de gastos de precampaña:
...

V.- La presentación de los informes de precampaña de cada aspirante se hará, ante el Consejo General, por conducto de cada partido político a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que concluya el proceso interno;

VI.- Cuando los aspirantes o el ganador de una candidatura rebasen los topes de gastos de

precampaña serán sancionados en primera instancia por los partidos políticos en los términos de sus propios estatutos, inclusive con la pérdida del derecho a registrarse como candidato por cualquier partido político, o a petición de parte, por el Instituto;

..."

El proceso de fiscalización aprobado por el Consejo General del Instituto en los Lineamientos para la presentación y fiscalización de informes de precampañas electorales, tiene una duración aproximada de cincuenta y dos días contados a partir de la recepción de los informes justificatorios y hasta la emisión de la resolución correspondiente por parte del Consejo General del Instituto.

Es importante referir que en la mayoría de los casos los partidos políticos que llevaron a cabo precampañas electorales optaron por dar por concluido su proceso interno en la misma fecha en que seleccionaron a sus candidatos.

Bajo este contexto, en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete, como se señaló anteriormente los procesos de selección podrían concluir el nueve o el veintitrés de agosto de dos mil siete, según el tipo de elección de que se trate, por consiguiente los informes justificatorios de gastos de precampaña podrían presentarse a más tardar el ocho o veintidós de septiembre, fechas en las que el registro de candidatos había concluido (para candidatos a Miembros de Ayuntamientos y Diputados de Mayoría Relativa) e inclusive los candidatos habrían iniciado sus campañas electorales. Ahora bien, si consideramos agotar los cincuenta y dos días de duración del proceso de fiscalización conducente, la última resolución del Consejo General respecto a si algún precandidato rebasó los topes de gastos de precampaña, podría haberse emitido en fecha posterior a la celebración de la jornada electoral, es decir, el once de noviembre de dos mil siete.

En este escenario, si algún precandidato infringiera la norma relativa a los topes de gastos de precampaña, el Instituto se podría encontrar técnicamente imposibilitado para aplicar la sanción prevista en el Código de la materia, siendo procedente únicamente ordenar la sustitución del candidato o incluso la cancelación del registro y en el peor de los casos, no realizar acción alguna al haberse efectuado la elección correspondiente.





Foto del primer concurso de fotografía.

De los argumentos expuestos se desprende el desacierto del Legislador al contemplar en las reformas tales plazos de manera independiente sin tomar en consideración que en la práctica se trata de situaciones íntimamente relacionadas impidiendo así su correcta aplicación. No se omite mencionar que en el ejemplo que nos ocupa ningún precandidato rebasó los topes aprobados por el Instituto Electoral del Estado, sin embargo se considera necesario realizar las modificaciones a las reformas conducentes a fin de evitar que tales hipótesis pudieran actualizarse en futuros Procesos Electorales.

La propuesta es la misma que la señalada en el inciso anterior: establecer que las precampañas finalicen sesenta días antes del inicio de los plazos de registros de candidatos correspondiente, lo cual traerá como consecuencia contar con tiempo suficiente para realizar el proceso de fiscalización correspondiente y dictar las resoluciones y sanciones respectivas, creando seguridad jurídica en los registros de candidatos que se aprueben.

D) Una complicación más consistió en la determinación de los topes de gastos de precampaña, límites que se contemplan en el artículo 200 bis Apartado C fracción I del CIPEEP, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 200 BIS.- ...

C. Del tope de gastos de precampaña:

I.- En su primera sesión, el Consejo General dará a conocer el tope de gastos de las precampañas para la selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al veinte por ciento del monto

fijado para gastos de campaña en la elección inmediata anterior del mismo nivel;
..."

El llevar a la práctica el dispositivo en referencia, generó un inconveniente al Instituto al pretender calcular los topes para los precandidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, al carecer del tope que sirviera de base para determinarlo, en virtud de que en el año dos mil cuatro no se establecieron los mismos para el tipo de elección que nos ocupa, así como que la ley electoral en el Estado no prevé su determinación.

Lo anterior en correspondencia a que al momento de elaborar la normatividad que reglamentaría lo concerniente a precampañas electorales, el Instituto Electoral del Estado consideró que si bien no se contempla en el Código Comicial la existencia de campañas electorales de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, atendiendo a que éstos no son electos a través del voto directo de los ciudadanos, sí era conducente la determinación de topes de gastos de precampaña para dicho tipo de elección, ya que el Código de la materia alude a las precampañas de manera general sin delimitar la realización de éstas a determinados tipos de elección, así como que la finalidad de los procesos internos es elegir a quienes serán postulados como candidatos por un partido político, resultando viable que los entes políticos utilicen dicho tipo de procedimiento para seleccionar a quienes integrarán la lista plurinominal en cuestión, situación que se prevé en los Estatutos de la mayoría de los institutos políticos.

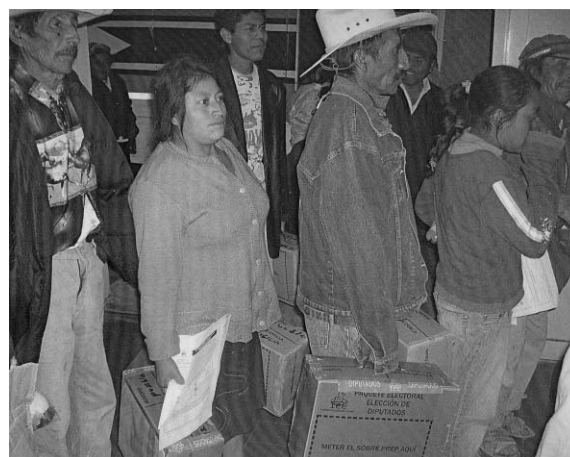


Foto del primer concurso de fotografía.

En concatenación con lo anterior, en los Lineamientos para la presentación y fiscalización de informes de precampañas electorales se contempla la presentación de informes de gastos de dichos precandidatos. Sin embargo, el Instituto no estuvo en posibilidad de determinar el correspondiente tope de gastos de precampaña al no contar con datos que sirvieran de parámetro para tal hecho, por lo que fue necesario tomar como punto de referencia el monto autorizado de gastos determinado por cada partido político, considerando necesario realizar reformas que permitan establecer un tope para tales casos, toda vez que se genera cierta desventaja para con los precandidatos de los partidos políticos por otros tipos de elección, al estar en la posibilidad de determinar el tope máximo a ejercer, sin considerar algún criterio específico.

De igual forma, es de mencionar que los topes de gastos de campaña en base a los cuales se determinan los correspondientes a precampaña, en algunos casos, representan importes mínimos para la realización de una campaña electoral lo que conlleva a que los topes de gastos de precampaña resulten insuficientes e irrisorios, por lo que no estaría por demás contemplar parámetros que permitan realizar campañas y precampañas bajo un contexto de mayor equidad, en cuanto a que se establezcan topes más acordes a la realidad.

Ahondando en el tema relativo a los montos a que refieren las reformas en análisis, es de mencionar que salvo la utilidad dada en el caso referido en el párrafo que antecede y de llevarse a cabo la reforma propuesta, se considera inoperable la determinación de un monto autorizado de gastos de precampaña por parte de los partidos políticos, toda vez que en las citadas reformas no se establecieron parámetros



Foto del primer concurso de fotografía.



Foto del primer concurso de fotografía.

para el establecimiento de tales montos, señalando como única restricción el que éstos no excedieran los topes determinados por el Consejo General, haciendo mención que la mayoría de los partidos políticos que realizaron precampañas fijaron como montos autorizados los importes determinados por el Instituto como topes de gastos de precampaña.

La propuesta es establecer parámetros que permitan determinar el Tope correspondiente a las precampañas que realicen los aspirantes a candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, así como los elementos que permitan que los límites de gastos que apruebe la autoridad electoral sean acordes a la realidad.

E) Un problema más, es el contenido en el diverso 200 bis Apartado C fracciones III y IV del CIPEEP, que expresa:

“ARTÍCULO 200 BIS.- ...

C. Del tope de gastos de precampaña:
...

III.- Los gastos de precampaña correrán a cargo de cada aspirante a la candidatura;

IV.- Las aportaciones en dinero realizadas por simpatizantes, personas físicas y morales, a las precampañas serán consideradas como parte de los límites que por aportaciones de simpatizantes puede recibir un partido político durante un año electoral en los



Foto del primer concurso de fotografía.

términos del artículo 48, fracción II incisos a) y c) del presente Código. Tales aportaciones podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante la precampaña por una persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda, los límites establecidos en el inciso c) fracción II del artículo 48 de este ordenamiento;

..."

En primera instancia se considera adecuado que las precampañas se sostengan exclusivamente con financiamiento privado, al permitir la existencia de una mayor igualdad, en el sentido de que quienes aspiren a ser postulados por algún partido político se encuentren en las mismas circunstancias para allegarse de recursos, evitando además el desvío de recursos del financiamiento público otorgado por el Estado a los partidos políticos como entidades de interés público, para el desarrollo y promoción de sus actividades en la vida política de la Entidad.

El desacierto en dicha reforma surge al considerar que las aportaciones que realizan los precandidatos o sus simpatizantes deben constreñirse a los límites de aportaciones en efectivo por persona fijados por el Instituto, los que son excesivamente reducidos (\$ 15,522.84), considerando que la aplicación de los mismos corresponde a todas las aportaciones recibidas en un año, situación que se hace más evidente en año electoral al estar en posibilidad de recibir aportaciones para precampañas, campañas, actividades ordinarias y medios de comunicación.

Al respecto debe tomarse en consideración que si bien el límite de las aportaciones en efectivo que puede realizar una persona es el mismo para todos los partidos políticos, equivalente al 0.05 por ciento del total del financiamiento que para el sostenimiento de actividades ordinarias se entregue en el año de que se trate, no debe perderse de vista que existe también un límite global para recibir aportaciones en efectivo, que se determina en relación directa con el financiamiento público que se hubiere otorgado a cada partido político por el rubro ya señalado, equivalente al diez por ciento, por lo que no corresponde el mismo importe global a cada uno de los entes políticos, como se puede observar en la tabla 1 que se acompaña al presente trabajo.

Ahora bien, al limitarse la posibilidad de realizar aportaciones en efectivo, se tiene la opción de recibirlas en especie, cuyo límite es más amplio, sin embargo dicha situación hace más evidente la diferencia de montos entre los partidos políticos, si se toma como referencia que tienen derecho a recibir aportaciones por financiamiento privado hasta por un importe equivalente al cincuenta por ciento del total del financiamiento público que hubiere recibido en el año de que se trate, tal y como se observa en la gráfica A anexa a este documento.

En este sentido, se estima que el fijar un límite reducido puede provocar que los partidos políticos no informen sobre la totalidad de las aportaciones que reciben, por lo que se considera necesario realizar las reformas conducentes en el Código Comicial a fin de que se establezcan límites más amplios que se acerquen a los importes que realmente destinan los precandidatos y sus simpatizantes a la realización de precampañas.

Citando nuevamente como ejemplo el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete, es de observar, que la mayoría de los precandidatos que contendieron en los procesos internos de los partidos políticos, no realizaron gastos de precampaña, en algunos casos debido a que las convocatorias emitidas por los respectivos entes políticos prohibía expresamente la realización de los mismos, lo que podría atribuirse a la problemática ya referida respecto a los límites de aportaciones, así como al hecho de que todas las aportaciones registradas fueron realizadas en especie, de acuerdo a los siguientes importes:

PARTIDO	AYUNTAMIENTOS	DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA	DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL	TOTAL
PAN	\$ 1'271,301.47	\$ 150,544.42	\$ 16,503.00	\$ 1'438,348.89
PRI	\$ 402,124.45	\$ 149,640.17	\$ 0.00	\$ 551,764.62
PRD	\$ 10,920.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,920.00
PT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVERGENCIA	---	---	---	---
PVEM	---	---	---	---
PANAL	---	---	---	---
ASPPN	\$ 76,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,700.00
PEC	---	---	---	---

Fuente: Informes detallados y definitivos de gastos de precampaña presentados por los diversos partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado, Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete

Al respecto, se menciona el número de precandidatos registrados y aquellos que ejercieron recursos en precampañas electorales en el año dos mil siete:

	AYUNTAMIENTOS		DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA		DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL		TOTAL	
PARTIDO	PRECAN- DIDATOS REGIS- TRADOS	PRECAN- DIDATOS QUE EJER- CIERON RECUR- SOS	PRECAN- DIDATOS REGIS- TRADOS	PRECAN- DIDATOS QUE EJER- CIERON RECUR- SOS	PRECAN- DIDATOS REGIS- TRADOS	PRECAN- DIDATOS QUE EJER- CIERON RECUR- SOS	PRECAN- DIDATOS REGIS- TRADOS	PRECAN- DIDATOS QUE EJER- CIERON RECUR- SOS
PAN	94	29 (31%)	63	12 (19%)	27	2 (7%)	184	43 (23%)
PRI	481	3 (1%)	26	6 (23%)	0	0 (0%)	507	9 (2%)
PRD	105	4 (4%)	10	0 (0%)	9	0 (0%)	124	4 (3%)
PT	42	0 (0%)	3	0 (0%)	0	0 (0%)	45	0 (0%)
CONVERGENCIA	---	---	---	---	---	---	---	---
PVEM	---	---	---	---	---	---	---	---
PANAL	---	---	---	---	---	---	---	---
ASPPN	3	1 (33%)	7	0 (0%)	0	0 (0%)	10	1 (10%)
PEC	---	---	---	---	---	---	---	---

Fuente: Informes detallados y definitivos de gastos de precampaña presentados por los diversos partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado, Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete.

F) Por último, dificultad y confusión resultó la presentación de dos tipos de informes de precampaña considerados en las reformas plasmadas en los artículos 52 bis Apartado C fracciones I y II y 200 bis Apartado C fracción V del CIPEEP, que refieren:

"ARTÍCULO 52 bis.- Los partidos políticos deberán rendir ante la comisión correspondiente del

instituto, los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

A. Informes anuales:

...

B. Informes de campaña:

...

C. Informes de precampaña:

I.- A más tardar dentro de treinta días siguientes a que concluya la selección de candidato, fórmula o planilla, los partidos políticos entregarán un informe detallado de los gastos aplicados por cada una de las precampañas, para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos respectivamente, dependiendo la elección de que se trate; y

II.- Los informes definitivos de gastos de precampaña deberán especificar los montos de los ingresos, así como su aplicación en los términos y proporciones que este Código establezca."

"ARTÍCULO 200 BIS.- ...

C. Del tope de gastos de precampaña:

...

V.- La presentación de los informes de precampaña de cada aspirante se hará, ante el Consejo General, por conducto de cada partido político a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que concluya el proceso interno;

..."

De acuerdo a la experiencia adquirida en la fiscalización de los informes de gastos de



Foto del primer concurso de fotografía.

precampaña presentados con motivo de las precampañas realizadas por los partidos políticos durante el año dos mil siete, se estima que el establecer dos tipos de informes resulta poco operativo, en virtud de que el proceso de selección interna no necesariamente concluye con la selección del candidato dependiendo de lo señalado en la convocatoria de cada partido político, ya que en algunos casos el proceso interno puede incluir etapas tales como cómputo de la votación, declaración de validez y entrega de constancias o en su caso interposición de recursos, por lo que puede darse el caso de que la fecha límite de presentación de ambos informes no sea la misma, impidiendo una adecuada fiscalización de los recursos recibidos y ejercidos, por lo que se considera que sería más útil y apropiado la presentación de un solo tipo de informe de precampaña, que incluya los requisitos que actualmente se fijan para cada tipo de informe.

II. ACIERTOS EN LA APLICACIÓN DE LAS REFORMAS EN MATERIA DE PRECAMPAÑAS.

Ahora bien y finalizando el análisis que se presenta en este trabajo, aun cuando existieron diversos problemas en la aplicación de las reformas en estudio, es importante destacar los aciertos derivados de la misma que deben ser resaltados, en especial si se toma en consideración que las reformas regulan la figura de precampañas implementada por primera vez en el Estado de Puebla y como cualquier proceso innovador es susceptible de perfeccionarse.

En primer término debe reconocerse la labor del Legislador al interesarse por incorporar al cuerpo legal una figura que si bien en la práctica se había realizado en Procesos Electorales

anteriores, se mantenía al margen de cualquier ordenamiento legal, elemento con el que se busca dar mayor transparencia y certidumbre al electorado.



Atinado fue de igual forma, que el Organismo Electoral monitoreara las precampañas, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 200 bis Apartado D fracción VII del CIPEEP, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 200 BIS.- ...

D. Queda prohibido a los precandidatos:

...

VII.- Contratar publicidad en los medios de comunicación social, para las precampañas, por sí o por interpósita persona;

...”

En virtud de lo anterior, el Instituto consideró viable la implementación del monitoreo de precampañas electorales en los medios de comunicación como herramienta que sirviera de apoyo para verificar que los aspirantes a candidatos acataran dicha prohibición, así como en la fiscalización de los informes de gastos de precampaña presentados por los partidos políticos.

Por lo anterior, el Instituto procedió a elaborar y aprobar los lineamientos conducentes, sin embargo debido a situaciones ajenas a dicho Organismo Electoral, en cuanto a asignaciones presupuestales, tanto la aprobación de los Lineamientos en comento como la instrumentación del monitoreo fue tardía, creándose condiciones de inequidad, toda vez que al momento de iniciarse el monitoreo había partidos que ya habían concluido algunas de sus precampañas, por lo que en tales casos fue imposible realizar la verificación correspondiente.

Un último acierto generado a raíz de las reformas en comento y de la creación de sus normas secundarias, impulsada por la Comisión Revisora de la aplicación de los regímenes del financiamiento de los partidos políticos, con la coadyuvancia de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y de la Coordinación de Informática del Instituto Electoral del Estado, se refiere al diseño, aprobación e implementación del Sistema de Apoyo para la Fiscalización de los Partidos Políticos en Precampañas (SAFPPP), con el que se permitió la sistematización de información que facilitó a los institutos políticos la presentación de sus correspondientes informes de gastos de precampañas.

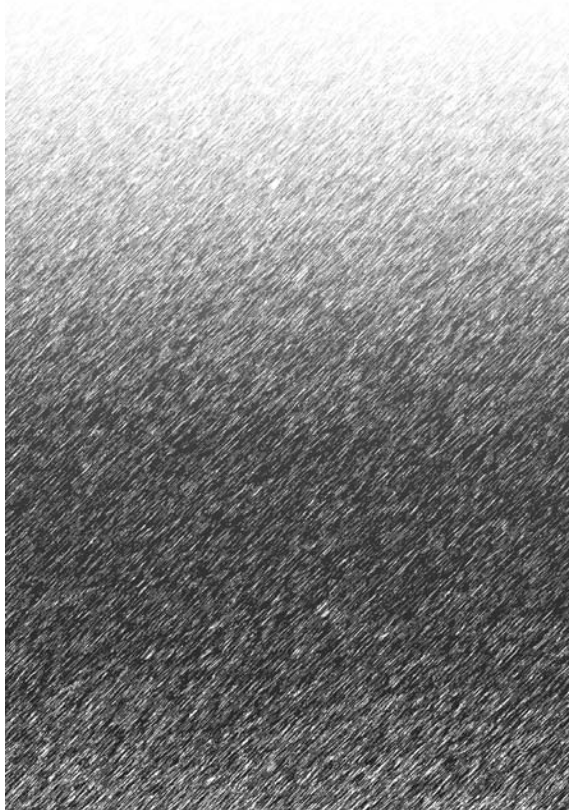


Foto del primer concurso de fotografía.

CONCLUSIONES

De la breve revisión a las reformas que en materia de precampañas electorales fueron aprobadas por la Quincuagésimo Sexta Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, podemos concluir que en esta Entidad se ha iniciado la tarea de regular una figura que resulta de trascendental importancia, debido a que con ello se busca contar con los elementos suficientes para que las precampañas se desarrollen en un ambiente de legalidad, imparcialidad, certeza y seguridad.

La inserción de dicha figura en el ámbito electoral estatal, aún cuando ahora podemos caracterizarla como incipiente y desarticulada, en razón de las problemáticas ya expuestas, representa un avance significativo susceptible de ser perfeccionado. El reto consiste en ajustar dichas reformas que originaron dificultad en su aplicación, a la realidad de un Proceso Electoral en el que confluyen diversas etapas y actividades concatenadas, en las que los tiempos para la toma de decisiones son reducidos y los escenarios diversos, pudiendo ser consideradas las propuestas y soluciones que en este trabajo se plantean y que tienen como sustento la experiencia recabada en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete.

BILIografía

Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, Instituto Electoral del Estado, Puebla, Pue., 2007.

Reglamento de precampañas electorales del Instituto Electoral del Estado, Aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en Sesión Especial de fecha doce de febrero de dos mil siete, mediante el Acuerdo identificado con la nomenclatura CG/AC-001/07.

Lineamientos para la presentación y fiscalización de informes de precampañas electorales, Aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en Sesión Especial de fecha trece de abril de dos mil siete, mediante el Acuerdo identificado con la nomenclatura CG/AC-016/07.

Lineamientos para el monitoreo de las precampañas electorales en los medios de comunicación, Aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en Sesión Especial de fecha dieciocho de junio de dos mil siete, mediante el Acuerdo identificado con la

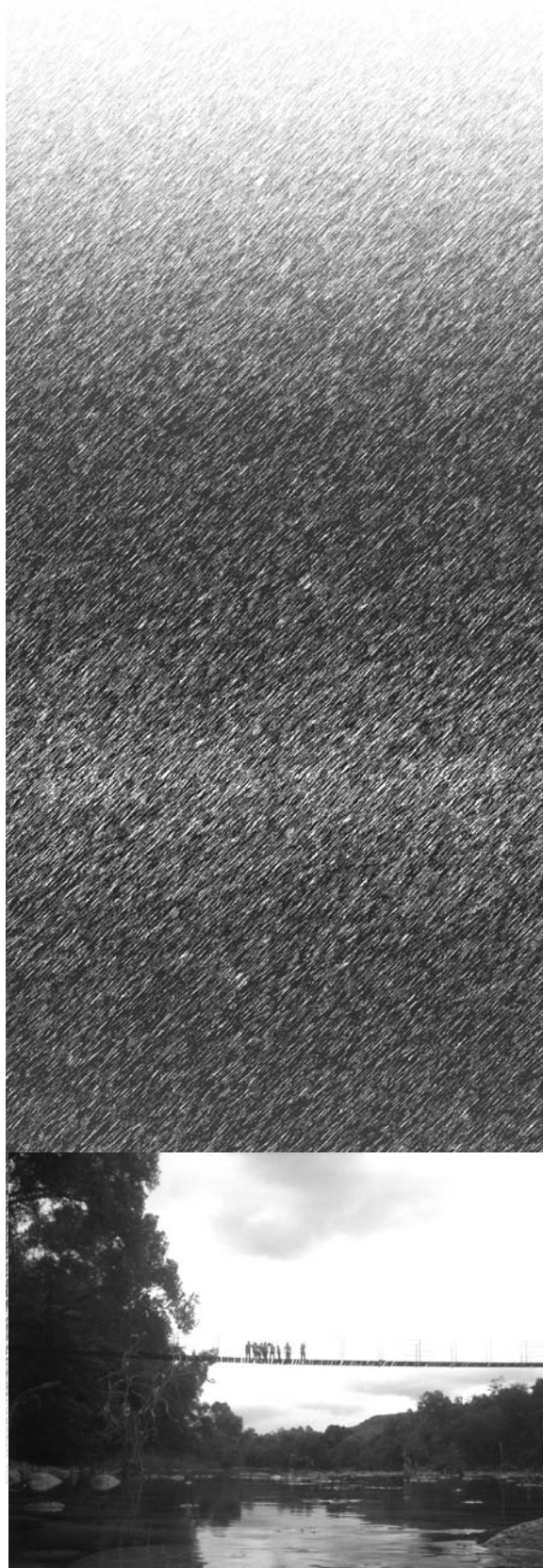


Foto del primer concurso de fotografía.

nomenclatura CG/AC-049/07.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del Ciudadano. SUP-JDC-1124/2007. Enrique Ramos Bernardino. 29 de agosto de 2007. Unanimidad de votos.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del Ciudadano. SUP-JDC-1644/2007 y acumulado. Enrique Ramos Bernardino y otros. 23 de octubre de 2007. Unanimidad de votos.

“ARTÍCULO 52 bis.- Los partidos políticos deberán rendir ante la comisión correspondiente del instituto, los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

- A. Informes anuales:
...
- B. Informes de campaña:
...
- C. Informes de precampaña:

I.- A más tardar dentro de treinta días siguientes a que concluya la selección de candidato, fórmula o planilla, los partidos políticos entregarán un informe detallado de los gastos aplicados por cada una de las precampañas, para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos respectivamente, dependiendo la elección de que se trate; y

II.- Los informes definitivos de gastos de precampaña deberán especificar los montos de los ingresos, así como su aplicación en los términos y proporciones que este Código establezca.”

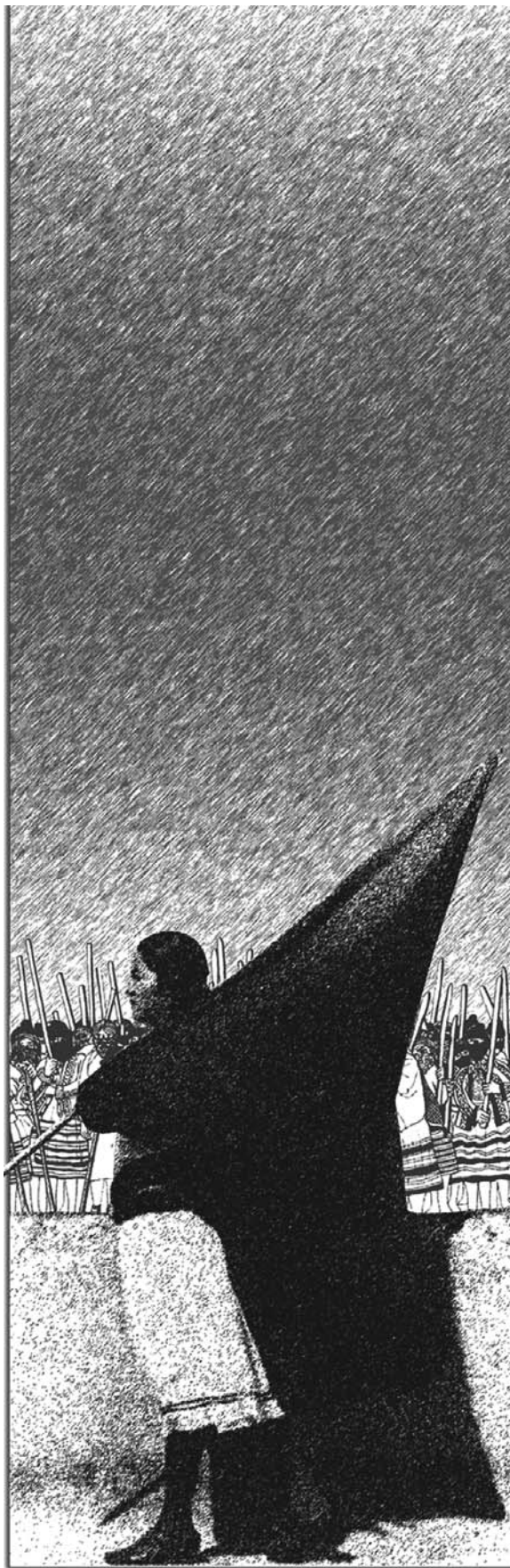
“ARTÍCULO 200 BIS.- ...

- C. Del tope de gastos de precampaña:
...

V.- La presentación de los informes de precampaña de cada aspirante se hará, ante el Consejo General, por conducto de cada partido político a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que concluya el proceso interno;

...”

De acuerdo a la experiencia adquirida en



la fiscalización de los informes de gastos de precampaña presentados con motivo de las precampañas realizadas por los partidos políticos durante el año dos mil siete, se estima que el establecer dos tipos de informes resulta poco operativo, en virtud de que el proceso de selección interna no necesariamente concluye con la selección del candidato dependiendo de lo señalado en la convocatoria de cada partido político, ya que en algunos casos el proceso interno puede incluir etapas tales como cómputo de la votación, declaración de validez y entrega de constancias o en su caso interposición de recursos, por lo que puede darse el caso de que la fecha límite de presentación de ambos informes no sea la misma, impidiendo una adecuada fiscalización de los recursos recibidos y ejercidos, por lo que se considera que sería más útil y apropiado la presentación de un solo tipo de informe de precampaña, que incluya los requisitos que actualmente se fijan para cada tipo de informe.

II. ACIERTOS EN LA APLICACIÓN DE LAS REFORMAS EN MATERIA DE PRECAMPAÑAS.

Ahora bien y finalizando el análisis que se presenta en este trabajo, aun cuando existieron diversos problemas en la aplicación de las reformas en estudio, es importante destacar los aciertos derivados de la misma que deben ser resaltados, en especial si se toma en consideración que las reformas regulan la figura de precampañas implementada por primera vez en el Estado de Puebla y como cualquier proceso innovador es susceptible de perfeccionarse.

En primer término debe reconocerse la labor del Legislador al interesarse por incorporar al cuerpo legal una figura que si bien en la práctica se había realizado en Procesos Electorales anteriores, se mantenía al margen de cualquier ordenamiento legal, elemento con el que se busca dar mayor transparencia y certidumbre al electorado.

Atinado fue de igual forma, que el Organismo Electoral monitoreara las precampañas, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 200 bis Apartado D fracción VII del CIPEP, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 200 BIS.- ...

D. Queda prohibido a los precandidatos:

...

VII.- Contratar publicidad en los medios de comunicación social, para las precampañas, por sí o por interpósita persona;

..."

En virtud de lo anterior, el Instituto consideró viable la implementación del monitoreo de precampañas electorales en los medios de comunicación como herramienta que sirviera de apoyo para verificar que los aspirantes a candidatos acataran dicha prohibición, así como en la fiscalización de los informes de gastos de precampaña presentados por los partidos políticos.

Por lo anterior, el Instituto procedió a elaborar y aprobar los lineamientos conducentes, sin embargo debido a situaciones ajenas a dicho Organismo Electoral, en cuanto a asignaciones presupuestales, tanto la aprobación de los Lineamientos en comento como la instrumentación del monitoreo fue tardía, creándose condiciones de inequidad, toda vez que al momento de iniciarse el monitoreo había partidos que ya habían concluido algunas de sus precampañas, por lo que en tales casos fue imposible realizar la verificación correspondiente.

Un último acierto generado a raíz de las reformas en comento y de la creación de sus normas secundarias, impulsada por la Comisión Revisora de la aplicación de los regímenes del financiamiento de los partidos políticos, con la coadyuvancia de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y de la Coordinación de Informática del Instituto Electoral del Estado, se refiere al diseño,



aprobación e implementación del Sistema de Apoyo para la Fiscalización de los Partidos Políticos en Precampañas (SAFPPP), con el que se permitió la sistematización de información que facilitó a los institutos políticos la presentación de sus correspondientes informes de gastos de precampañas.

CONCLUSIONES

De la breve revisión a las reformas que en materia de precampañas electorales fueron aprobadas por la Quincuagésimo Sexta Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, podemos concluir que en esta Entidad se ha iniciado la tarea de regular una figura que resulta de trascendental importancia, debido a que con ello se busca contar con los elementos suficientes para que las precampañas se desarrollen en un ambiente de legalidad, imparcialidad, certeza y seguridad.

La inserción de dicha figura en el ámbito electoral estatal, aún cuando ahora podemos caracterizarla como incipiente y desarticulada, en razón de las problemáticas ya expuestas, representa un avance significativo susceptible de ser perfeccionado. El reto consiste en ajustar dichas reformas que originaron dificultad en su aplicación, a la realidad de un Proceso Electoral en el que confluyen diversas etapas y actividades concatenadas, en las que los tiempos para la toma de decisiones son reducidos y los escenarios diversos, pudiendo ser consideradas las propuestas y soluciones que en este trabajo se plantean y que tienen como sustento la experiencia recabada en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete.

BIBLIOGRAFÍA

Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, Instituto Electoral del Estado, Puebla, Pue., 2007.

Reglamento de precampañas electorales del Instituto Electoral del Estado, Aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en Sesión Especial de fecha doce de febrero de dos mil siete, mediante el Acuerdo identificado con la nomenclatura CG/AC-001/07.

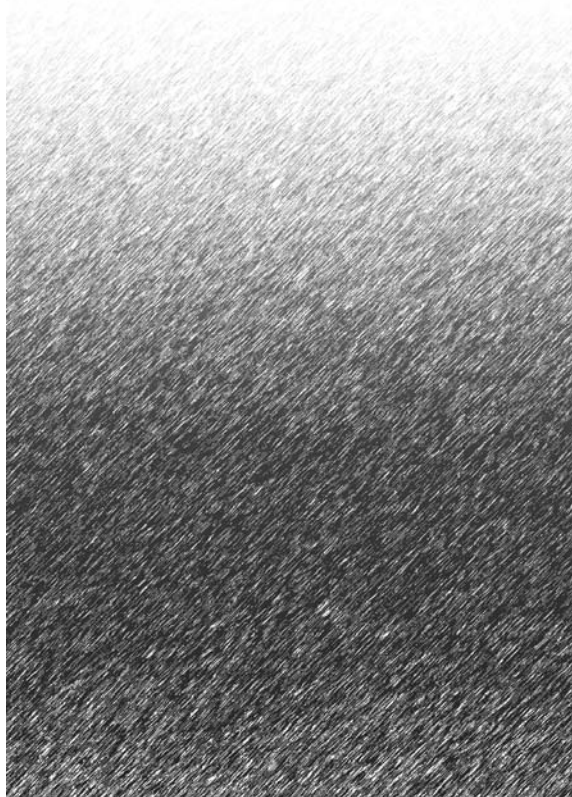
Lineamientos para la presentación y fiscalización de informes de precampañas electorales, Aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en Sesión Especial de fecha trece de abril de dos mil siete, mediante el Acuerdo identificado con la nomenclatura CG/AC-016/07.

Lineamientos para el monitoreo de las precampañas electorales en los medios de comunicación, Aprobados por el Consejo General del

Instituto Electoral del Estado en Sesión Especial de fecha dieciocho de junio de dos mil siete, mediante el Acuerdo identificado con la nomenclatura CG/AC-049/07.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del Ciudadano. SUP-JDC-1124/2007. Enrique Ramos Bernardino. 29 de agosto de 2007. Unanimidad de votos.

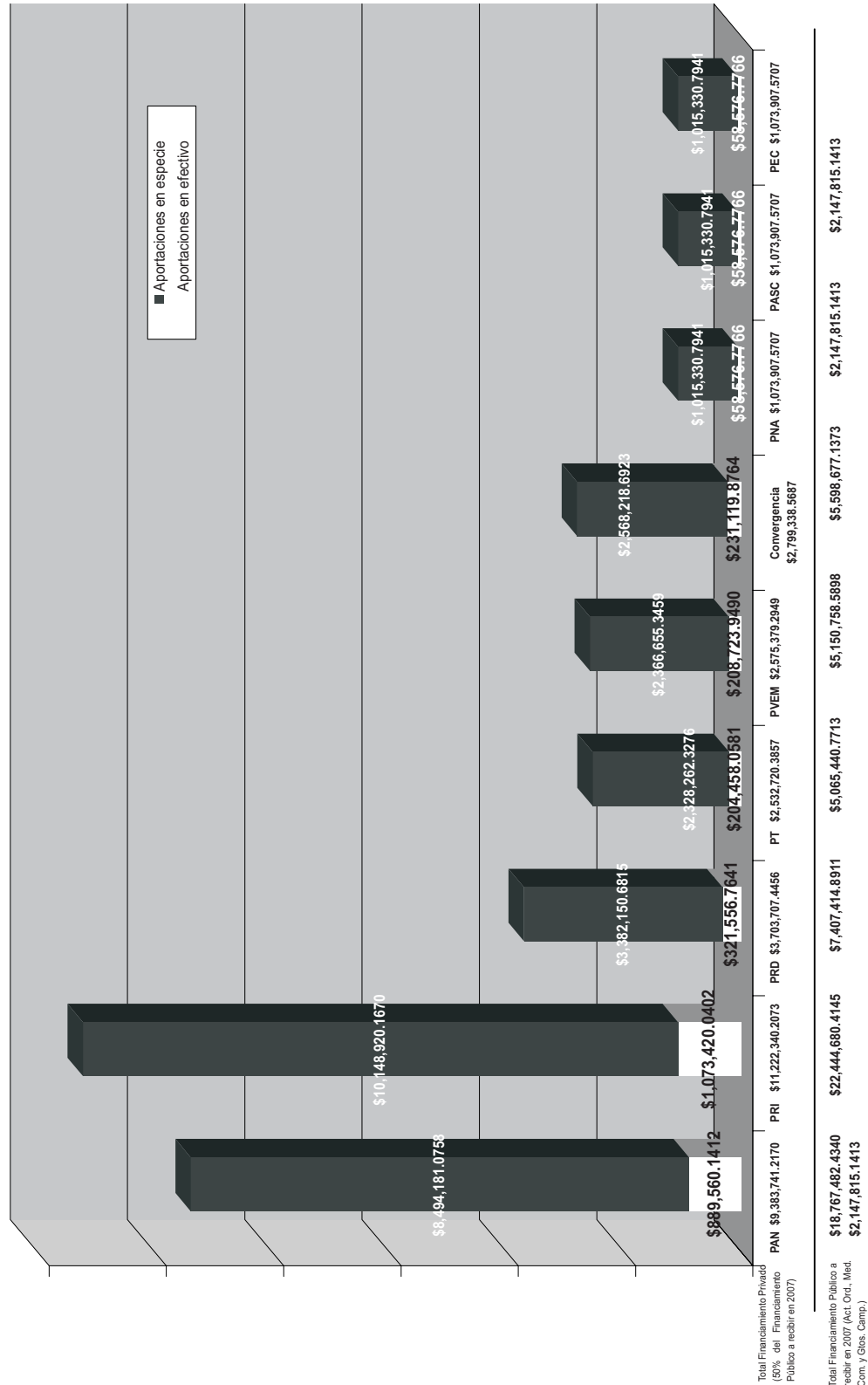
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del Ciudadano. SUP-JDC-1644/2007 y acumulado. Enrique Ramos Bernardino y otros. 23 de octubre de 2007. Unanimidad de votos.



AL FINANCIAMIENTO PRIVADO DEL PERIODO JULIO 2007 A JUNIO 2008


**PANTEÓN ESPIRITISTA
CUBANO**
 TRAFICARLA, ESPERARLA Y
 RESUMIRLA EN UNO

FINANCIAMIENTO PRIVADO A RECIBIR POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON BASE EN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO EN EL AÑO ELECTORAL 2007



El IEE a ocho años de su conformación

Noé Julián Corona Cabañas*

Antecedentes.

En el año 2000 el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Puebla, entre ellas se encontraban las modificaciones a los artículos 3 y 4 de ese Ordenamiento que trajeron como consecuencia la promulgación del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Derivado de las modificaciones legislativas señaladas se creó el Instituto Electoral del Estado, reconociendo a su estructura operativa e implementándose el sistema de profesionalización de sus funcionarios.

A la fecha el Organismo Electoral Local ha organizado 3 procesos electorales ordinarios -2001, 2004 y 2007- y 3 procesos electorales extraordinarios -2002, 2005 y 2008-, además en 2006 concluyó el periodo para el que fueron designados los primeros Consejeros Electorales de su Consejo General -2000-2006- y la Legislatura local designó a los Funcionarios Electorales que se desempeñarán como Consejeros del 2006 al 2012.

Por último, debe señalarse que la legislación electoral local se ha reformado 2 veces desde su promulgación en los años 2003 y 2006. En este contexto se debe comentar que la reforma a la Constitución Federal en materia electoral, traerá como consecuencia el ajuste de la legislación local en materia electoral a las disposiciones federales, modificación legislativa que regulará la elección del año 2010.

Tomando en consideración lo apuntado anteriormente se propone efectuar un análisis al comportamiento que ha observado el Organismo Electoral a 8 años de su fundación, con la finalidad de obtener datos

* Secretario General del Instituto Electoral del Estado



que permitan conocer sobre su consolidación como institución en el ejercicio de la función que le fue encomendada.

El estudio versará sobre el reto que tiene la organización frente a la expectativa ciudadana, así como sobre su capacidad para tomar las decisiones que revisten de legalidad la organización de un proceso electoral.

El reto del Organismo.

La naturaleza del Instituto Electoral y su función exige que sus integrantes sean ciudadanos sin vínculos que puedan afectar su actuar imparcial y sobre todo que tengan un gran compromiso con los principios democráticos, garantizando a la ciudadanía que su voluntad expresada en las urnas es respetada, lo que traerá como consecuencia contar con Autoridades legal y legítimamente electas.

Lo anterior es relevante, pues para organizar elecciones se necesita trabajar por una serie de acuerdos y consensos entre los actores de un proceso electoral que permitan armar la estructura jurídica –andamiaje– del proceso electoral, basados en los principios rectores de la función electoral que son: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Por eso es necesario analizar la actuación del Instituto tomando en consideración la naturaleza del Organismo y sus antecedentes, pues con el paso del tiempo las decisiones que dan rumbo a la acción operativa han evolucionado.

Este análisis dará elementos para poder determinar de que forma se ha consolidado el Organismo Electoral local en el ejercicio de la función que le fue encomendada.

La efectividad legal del Instituto

El estudio versará sobre la actividad del Consejo General del organismo local en atención a que es el Órgano Superior de Dirección del Instituto y en ese carácter es el responsable de tomar las decisiones que norman el desarrollo de las actividades operativas vinculadas con la organización del proceso electoral.

Al analizar la efectividad legal del



Consejo General al aprobar acuerdos y resoluciones que se relacionan con la organización del proceso electoral y la administración de los recursos de los partidos políticos, así como el número de impugnaciones que en contra de ellos son presentadas por los partidos, se obtendrá el número de acuerdos confirmados y revocados por la Autoridad Jurisdiccional Local o Federal y en consecuencia el rendimiento legal del Consejo General; que tiene como soporte de su actuación a la estructura operativa del Organismo.

El factor de efectividad legal cobra relevancia al considerar que aún y cuando una determinación impugnada no sea modificada, da evidencia de la dificultad que se puede tener para construir los consensos entre los diferentes actores políticos involucrados en la organización del proceso electoral.

Considerar el rendimiento del Consejo General en los 6 procesos electorales locales anteriores, tanto ordinarios como extraordinarios, tiene como finalidad conocer el desempeño de ese Órgano de decisión del Instituto Electoral del Estado, para poder determinar el grado de avance y

consolidación del mencionado Organismo, además permitirá establecer instrumentos de medición objetivos, cuya finalidad será reflejar la realidad que al interior del Instituto Electoral del Estado se vive desde el año 2000, tomando en cuenta la implementación y fortalecimiento del sistema de profesionalización del personal operativo.

La medición se ocupará de la eficiencia legal, en atención a que la legalidad entendida como la adecuación estricta a la Ley de las actuaciones de los organismos electorales, es el único referente objetivo de observancia de los demás principios rectores, pues para asegurar que la actuación del Instituto sea objetiva, imparcial, independiente y de certeza a los actores en un proceso electoral debe encontrarse apegada a la norma.

Además, los actores en un proceso electoral toman como referente la Ley para impugnar las decisiones que consideran contrarias a los mencionados principios, lo que implica que la capacidad de generar consenso en relación con la actuación del Consejo General también puede ser cuestionada sobre la base de la legalidad.

Al analizar el número de acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo General y compararlo con las impugnaciones presentadas por los partidos políticos y las sentencias dictadas por la Autoridad Jurisdiccional Local o Federal, se obtendrán los siguientes datos:

a) La capacidad del Instituto Electoral del Estado para construir consensos al momento de tomar decisiones, al comparar el número de determinaciones aprobadas e impugnadas por los partidos políticos; y

b) El apego al principio de legalidad de las

decisiones aprobadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, al comparar el número de las que son impugnadas con las que son revocadas o modificadas por la Autoridad Jurisdiccional Local o Federal.

Lo anterior permitirá conocer en términos porcentuales la efectividad legal del Organismo, así como su apego a los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones, que son base de su funcionamiento.

Resultado del análisis.

Una vez que se analizó la información referente al número de acuerdos tomados por el Consejo General, los impugnados por los partidos políticos ante la Autoridad Jurisdiccional Local o Federal y la procedencia de las impugnaciones en comento, se puede llegar a la conclusión de que en los 6 últimos procesos electorales el número de impugnaciones ha disminuido, al igual que el número de determinaciones revocadas por la autoridad jurisdiccional, como se ve a continuación.

La información se presentará en un cuadro que reflejará el proceso electoral que corresponda, el número de acuerdos y resoluciones aprobados, impugnados, confirmados o modificados, según sea el caso y la representación porcentual de lo que definimos como efectividad legal que resulta de conocer el número de decisiones aprobadas que no son modificadas por la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Es preciso recordar al lector que las determinaciones que se toman en consideración para desarrollar este estudio son las que se vinculan con la organización del proceso electoral y la administración de los recursos de los partidos políticos.

Proceso Electoral	Acuerdos y Resoluciones del Consejo General				% de efectividad legal
	Aprobados	Impugnados	Confirmados	Revocados	
2001 Ord.	79	15	13	2	97.50
2002 Ext.	37	3	2	1	97.30
2004 Ord.	115	9	7	1	99.14
2005 Ext.	60	0	0	0	100
2007 Ord.	150	4	2	2	98.67
2008 Ext.	57	1	0	1	98.25

Así podemos observar que en 2001 se impugnaron 15 acuerdos, de los cuales se revocaron 2, pero para el año 2007 se impugnaron 4 acuerdos o resoluciones vinculados con la organización del proceso electoral, de los cuales se revocaron 2.

Estos datos demuestran que el número de acuerdos o resoluciones impugnadas ha disminuido de manera importante a lo largo del periodo, pues en el 2001 se impugnaba el 18.98 % de las determinaciones en estudio y para el 2007 solo se impugnó el 2.6% de esos acuerdos.

Otro dato interesante es que el porcentaje de efectividad de las impugnaciones interpuestas creció, pues en el 2001 era de 13.33% y para el último proceso electoral ordinario fue del 50%.

En relación con los acuerdos o resoluciones impugnados, los temas sobre los versan son relacionados con el registro de los candidatos a cargos de elección popular y la asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional.

Las determinaciones tomadas por el Consejo General vinculadas con la organización del proceso electoral local no sido han revocadas, lo que da cuenta de la forma en la que tanto el mencionado Órgano Electoral como el Área Operativa del Organismo trabajan en la construcción del andamiaje jurídico del proceso electoral.

De igual forma el concentrado anterior da cuenta del aumento de acuerdos y resoluciones aprobadas por el Consejo General, lo que se debe tanto a las modificaciones que ha tenido nuestra legislación ordinaria como a la especialización que en la materia se ha logrado en el Organismo.

Conclusiones.

La información analizada en las líneas anteriores permite llegar a las siguientes conclusiones:

1. El porcentaje de efectividad legal demuestra que el Instituto Electoral del Estado se ha consolidado a lo largo de los 8 años de existencia, pues en el periodo en revisión el mismo se mantiene sobre el 90%.

2. Las decisiones vinculadas con la organización técnica del proceso electoral -

organización, capacitación, prerrogativas, etc...- no son impugnadas, lo que da muestra de la consolidación operativa del Instituto.

3. Las decisiones relacionadas con el registro de candidatos y la asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional son impugnadas de manera recurrente por los partidos políticos a lo largo de periodo.

4. El Instituto cuenta con personal profesional con una amplia experiencia y sobre todo con un gran compromiso con la institución, pues a lo largo de estos 8 años se ha logrado vincular el interés institucional con el interés personal de sus trabajadores, lo que es fundamental para obtener los resultados que analizan en este documento.

Por último, retomando lo comentado en la introducción de este documento se debe resaltar la importancia que tendrá la reforma electoral local en la operación del Instituto, pues los ajustes que se deben hacer para adecuar la legislación a las disposiciones que sobre la materia contempla la Constitución Federal son de gran importancia, ya que tocan temas como: cambio de fecha de la jornada electoral, financiamiento de los partidos políticos, acceso a medios de comunicación, por citar los más importantes.

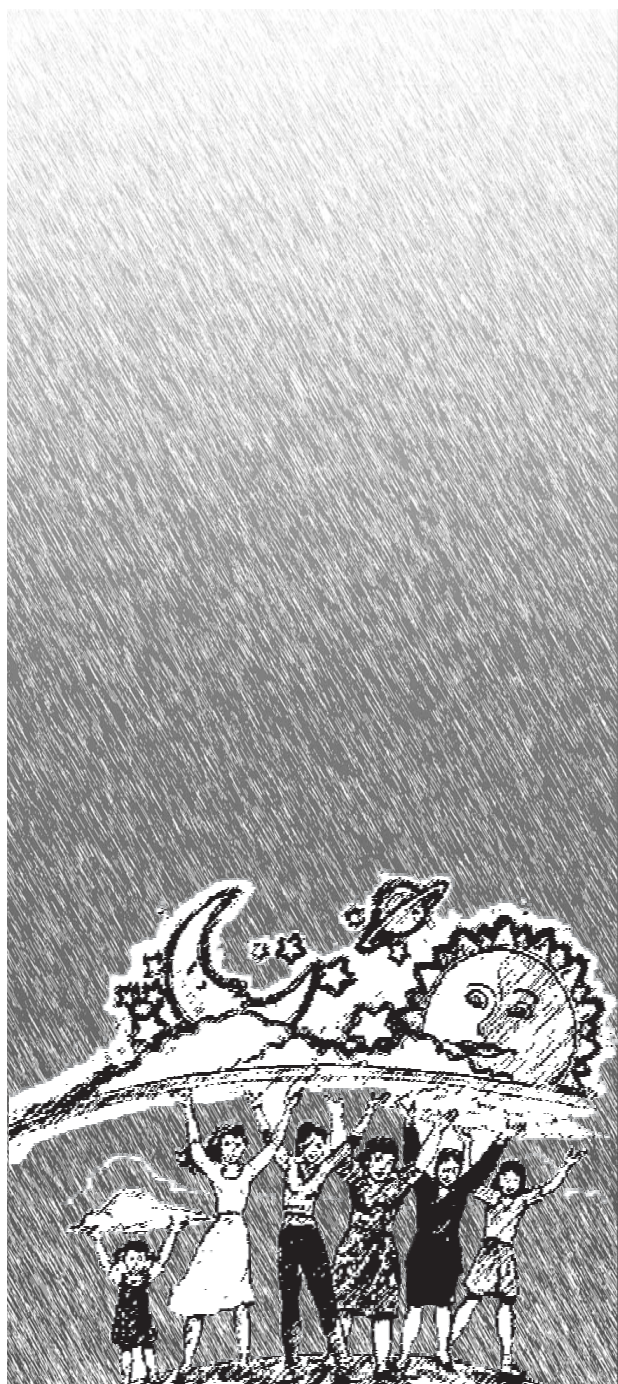
Sin embargo, tomando en cuenta el resulta del análisis se considera que el Instituto Electoral del Estado continuará en el camino de su consolidación como institución, cuyo próximo reto será la organización del proceso electoral ordinario del año 2010.

Fuentes de Información.

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
3. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
4. Memorias de los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios de los años 2001, 2002, 2004 y 2005.
5. Sitio web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
6. Sitio web del Honorable Congreso del Estado de Puebla.
7. Sitio web del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
8. Sitio web del Instituto Electoral del Estado.

Las mujeres en la integración de los consejos distritales y consejos municipales electorales en los procesos electorales ordinarios 2004 - 2007.

Marcelina Sánchez Muñoz*



La función estatal de organizar las elecciones para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, al titular del Poder Ejecutivo y a los miembros de los Ayuntamientos, le corresponde al Instituto Electoral del Estado, el que a través de un proceso electoral lleva a cabo un conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución Local y por el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, sin dejar pasar la corresponsabilidad de los ciudadanos, partidos políticos y el Congreso del Estado.

La corresponsabilidad de la ciudadanía es una parte importante en cada proceso electoral ya que en la medida de la participación ciudadana se llevan a cabo diversas etapas de todo proceso electoral desde su inicio, tal es el caso de la primera etapa de éste de la cual nos ocupamos en este espacio, me refiero a la integración de los órganos electorales transitorios, haciendo un comparativo entre los procesos electorales locales correspondientes a los años 2004 y 2007.

Una de las atribuciones de la Dirección de Organización Electoral establecida en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla en su artículo 103 fracción I, es la de Coordinar la integración, instalación y funcionamiento de los órganos electorales del Instituto.

En primer lugar hablaremos de cómo se integraron los Consejos Distritales Electorales y posteriormente los Consejos Municipales Electorales.

Para llevar a cabo la integración de los órganos electorales, que hoy nos ocupa, se realizaron diversas actividades, mismas que se comparan en los siguientes cuadros.

De los módulos receptores de documentación de aspirantes:

* Directora de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004

Se instalaron **27 módulos receptores** (1 en cada cabecera distrital y uno en la Sede del Instituto).

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007

Se instalaron **21 módulos receptores** (20 en las cabeceras distritales foráneas y uno en la Sede del Instituto centralizando así los 6 distritos del municipio de Puebla).

Se consideró disminuir el número de módulos centralizando la recepción para mejor control en la Sede del Instituto.

De la conclusión de la recepción de solicitudes, a continuación presentamos el comparativo de aspirantes en los años 2004 y 2007.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004

Un total de **2669 solicitudes**.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007

Un total de **2228 solicitudes**.

De los cuadros anteriores podemos observar que la participación ciudadana en el proceso electoral 2007 disminuyó en esta etapa de integración, en 441 solicitudes.

Una vez concluida la recepción de solicitudes, cada expediente fue analizado en atención al método y a los criterios de selección que el Consejo General del Instituto aprobó, después de haber sido propuesto por las diversas comisiones integradas para el caso.

Dentro del método se establecieron cuatro rubros a considerar para evaluar las solicitudes, para ello se tomó en cuenta la experiencia electoral, escolaridad, la ocupación y las actividades sociales.

A continuación se presentan los puntajes que se establecieron para cada uno de los conceptos a evaluar en los años comparados, esto es 2004 y 2007.



PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004

Experiencia Electoral

1 Sin experiencia	0.5
2 Funcionario de casilla	1.0
3 Auxiliar, capacitador o actuario	1.0
4 Consejero municipal	1.5
5 Supervisor de capacitación	1.5
6 Funcionario electoral (1)	2.0
7 Consejero distrital estatal	3.0
8 Consejero o vocal distrital federal	3.0
9 Consejero de comisión estatal o del I.E.E.	3.5
10 Vocal de la junta local federal	3.5
PUNTAJE MÁXIMO	3.5

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007	
Experiencia Electoral	
Funcionario de Mesa Directiva de Casilla	1.0
Asistente, Capacitador o Actuario, Analista	1.5
Supervisor, Coordinador de Organización o Capacitación	2.0
Funcionario Electoral Estatal o Federal	3.0
Consejero o Secretario Electoral en el ámbito Estatal o Federal	4.0

En este caso, se puede observar que en el año 2007 se reagruparon los cargos de la experiencia electoral, en cinco apartados lo que permitió obtener puntajes más precisos. A demás, en este año se consideró evaluar a los aspirantes que no tenían experiencia electoral sin puntaje, así que sólo se les evaluó en los rubros de escolaridad, ocupación y actividades sociales.

Observando los cuadros siguientes podemos ver que los aspirantes sin experiencia electoral obtenían mejor puntaje en el rubro escolaridad, lo que permitió valorar su grado de estudio de mejor manera que les permitieran integrar un Consejo Distrital y obtener experiencia electoral para futuros procesos electorales, lo mismo sucedió con los rubros de ocupación y actividades sociales.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004	
Escolaridad	
1 Hasta primaria	0.5
2 Secundaria	1.0
3 Preparatoria (2)	1.5
4 Maestro normalista	1.5
5 Licenciatura (3)	2.0
6 Posgrado	2.5
PUNTAJE MÁXIMO	2.5

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007	
Escolaridad	
Educación básica concluida: primaria o secundaria.	
Con Experiencia Electoral	0.5
Sin Experiencia Electoral	0.5
Estudios medios inconclusos: Bachillerato o carrera técnica.	
Con Experiencia Electoral	1.0
Sin Experiencia Electoral	1.0
Estudios medios concluidos: Bachillerato o carrera técnica.	
Con Experiencia Electoral	1.5
Sin Experiencia Electoral	2.0
Estudios superiores inconclusos.	
Con Experiencia Electoral	2.0
Sin Experiencia Electoral	3.0
Estudios superiores concluidos.	
Con Experiencia Electoral	2.5
Sin Experiencia Electoral	4.0
Posgrado.	
Con Experiencia Electoral	3.0
Sin Experiencia Electoral	5.0

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004	
Ocupación	
1 Independientes desempleado	1.0
Estudiante a nivel profesional	1.5
Profesionista independiente o ama de casa	2.5
2 Agrícola y ganadero jornalero	1.5
Ejidatario o comunero	2.0
Pequeño propietario	2.5
3 Industria empleado u obrero	1.5
Mando intermedio	1.5
Directivo (4)	2.0
Propietario o artesano	2.5
4 Banca y sector publico empleado	1.5
Funcionario	2.0
Directivo (4)	2.5
5 Comercio empleado por su cuenta o mando intermedio	1.5
Directivo (4)	2.0
Propietario	2.5
PUNTAJE MÁXIMO	2.5

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007	
Ocupación	
Agricultor o Labores del Hogar.	
Con Experiencia Electoral	0.5
Sin Experiencia Electoral	0.5
Actividad comercial, empresarial por su cuenta o empleado del sector público o privado.	
Con Experiencia Electoral	1.0
Sin Experiencia Electoral	1.5
Empleado del sector público o privado de mando intermedio.	
Con Experiencia Electoral	1.5
Sin Experiencia Electoral	2.5
Profesionista independiente o empleado del sector público o privado de mando superior.	
Con Experiencia Electoral	2.0
Sin Experiencia Electoral	3.5

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004	
Actividades en organizaciones cívicas no partidistas	
1 Miembro	1.0
2 Directivo	1.5
PUNTAJE MÁXIMO	1.5

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007	
Actividades Cívico Políticas y Sociales	
Sociales, culturales y/o análogos.	
Con Experiencia Electoral	1.0
Sin Experiencia Electoral	1.5

Los Consejos Distritales se integraron como lo establece la ley electoral local, en los años que se comparan, por 312 ciudadanos, de los cuales 156 fueron propietarios y 156 suplentes.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004			
PROPIETARIOS		SUPLENTE	TOTAL
Hombres	108	Hombres 102	210
Mujeres	48	Mujeres 54	102
Subtotal	156	156	312



PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007			
PROPIETARIOS		SUPLENTE	TOTAL
Hombres	98	Hombres	91
Mujeres	58	Mujeres	65
Subtotal	156	156	312

Es importante resaltar la participación de la mujer en la conformación de los órganos electorales, ya que en el año 2007 podemos observar un aumento considerable respecto del proceso electoral 2004.

A continuación hablaremos de los Consejos Municipales Electorales

De los módulos receptores de documentación de aspirantes:

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004
Se instalaron 223 módulos receptores (1 en cada municipio cabecera de distrito, 6 en los Distritos del municipio de Puebla, 196 en diversos municipios que integran el Estado y uno en la Sede del Instituto).

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007
Se instalaron 223 módulos receptores (1 en cada municipio cabecera de distrito, 6 en los Distritos del municipio de Puebla, 196 en diversos municipios que integran el Estado y uno en la Sede del Instituto).

No existió modificación alguna en el número de módulos receptores que funcionaron en los Procesos Electorales 2004 y 2007, instalados por la Dirección de Organización Electoral.

De la conclusión de la recepción de solicitudes, a continuación presentamos el comparativo de aspirantes en los años 2004 y 2007.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004
Un total de 7905 solicitudes de aspirantes.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007
Un total de 6840 solicitudes de aspirantes.

De los cuadros anteriores podemos observar una disminución en la participación ciudadana en el proceso electoral 2007 de 1065 solicitudes.

El método y criterios de selección para la integración de los Consejos Municipales Electorales cambio, de valoración numérica a indicadores por letras, esto es, no existió puntaje en la evaluación sino un valor alfabético, con la finalidad de no hacer una interpretación calificativa de las solicitudes, como podemos observar en los cuadros siguientes:

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004
Experiencia Electoral
Funcionario de Mesa Directiva de Casilla, asistente, capacitador o actuario, supervisor de capacitación y funcionario Estatal o Federal. 1.0
Consejero o Secretario Electoral Municipal o Distrital, en el ámbito Estatal o Federal. 1.5

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007
Experiencia Electoral
Sin experiencia A
Funcionario de Mesa Directiva de Casilla B
Asistente, Capacitador, Actuario, Analista C
Supervisor, Coordinador de Organización o Capacitación D
Funcionario Electoral Estatal o Federal E
Consejero o Secretario Electoral en el ámbito Estatal o Federal F

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004
Escolaridad
Educación básica, primaria o secundaria. 2.0
Estudios medios, bachillerato, tecnológico o carreras cortas concluidos o inconclusos. 2.5
Estudios superiores inconclusos o pasantía. 3.0
Licenciatura. 3.5
Postgrado. 4.0

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007	
Escolaridad	
Primaria inconclusa	A
Primaria concluida o secundaria	B
Bachillerato concluido o carrera técnica	C
Licenciatura concluida o Posgrado	D

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004	
Empleo	
Estudiante.	1.5
Agricultor, ama de casa.	2.0
Actividad comercial o empresarial, empleado del sector público o privado y mando intermedio.	2.5
Profesionista trabajador por su cuenta o directivo en sector público o privado.	3.5

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007	
Ocupación	
Sin Ocupación	A
Agricultor, Trabajador independiente, labores del hogar, actividad comercial, actividad empresarial, empleado del sector público o privado	B
Mando medio en: Actividad comercial, actividad empresarial, empleado del sector público o privado	C
Mando superior en: Actividad comercial, actividad empresarial, empleado del sector público o privado	D

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004	
Actividad social	1.0



PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007

Actividades Cívico Políticas y Sociales

Sin actividad	A
Con actividad	B

De igual forma que el método para integrar los Consejos Distritales Electorales, éste se reestructuró y agrupó el nivel académico, la ocupación y la actividad social, igualmente distinguiendo entre quienes contaban con experiencia electoral y quienes no la tenían.

A continuación observamos la diferencia de la participación femenina en los procesos electorales 2004 y 2007, en éste último se incrementó incluso siendo mayor que la participación masculina.

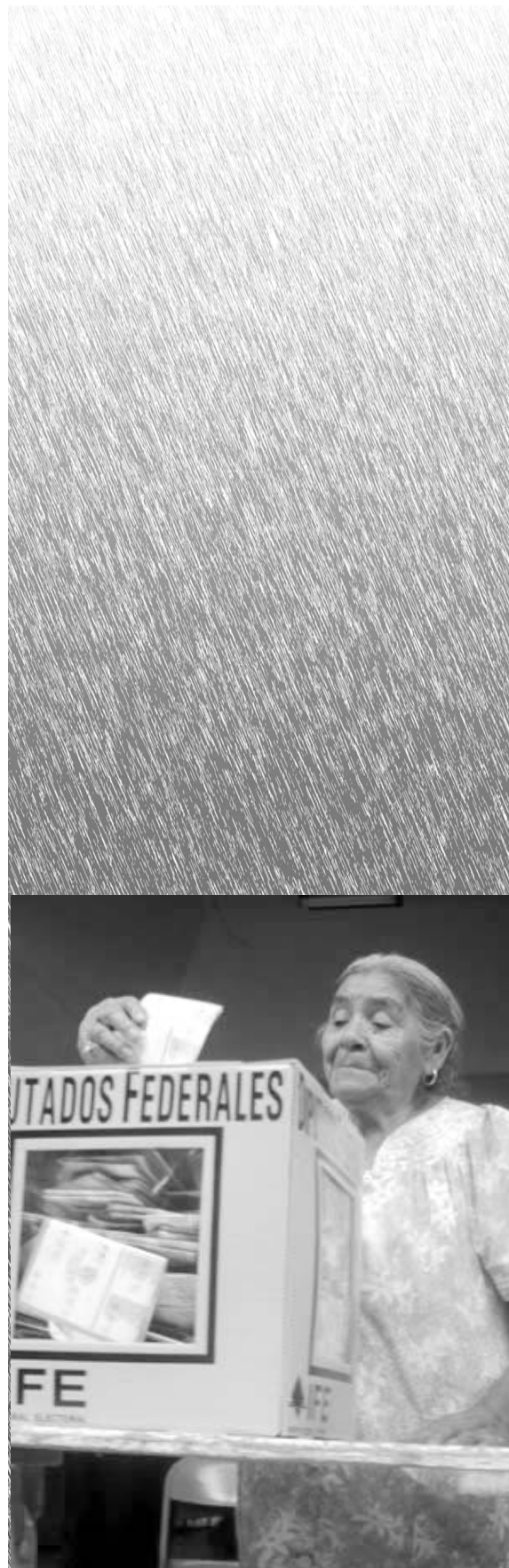
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004

PROPIETARIOS		SUPLENTES	TOTAL
Hombres	725	Hombres 622	1347
Mujeres	579	Mujeres 682	1261
Subtotal	1304	1304	2608

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007

PROPIETARIOS		SUPLENTES	TOTAL
Hombres	591	Hombres 512	1103
Mujeres	713	Mujeres 732	1505
Subtotal	1304	1304	2608

Podemos observar, que la democracia, no es cuestión de género, no solo se refiere al incremento de la participación de las mujeres sino al pleno ejercicio de sus derechos. Con este comparativo podemos ver que solo en tres años la mujer ha tomado el rol en la vida política que siempre debió corresponderle, la toma de decisiones, y es a través de la conformación de los órganos electorales desde donde la voluntad y aspiración de nuevas experiencias de sociabilidad y participación en la esfera pública nos permite concluir que la participación en la vida democrática no es cuestión de CUOTAS.



Requisitos

de publicación.....

Revista

Los artículos deberán cumplir con las normas editoriales siguientes:

1. Abordar cualquiera de los temas electorales.
2. Poseer rigurosidad científica y hacer un uso adecuado de las fuentes de información.
3. En la primera página debe tener: título, sumario, resumen y palabras claves.
4. Tener un mínimo de 10 y un máximo de 15 cuartill (tamaño carta)

márgenes:

2.5 cms., superior

2.5 cms., inferior

3.5 cms., izquierdo

2.5 cms., derecho

(o bien 1,840 caracteres con espacios por cada cuartilla).

5. Estar escrito a doble espacio en fuente Arial, en 11 puntos.
6. Entregar impreso y en formato digital en word en el Instituto Estatal Electoral (IEE), dirigido a Javier Santiago Cruz (15 pte. 3515, Col. Belisario Domínguez, C.P. 72180, Puebla, Pue.





Instituto Electoral del Estado

vota



Instituto Electoral del Estado